



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Escuela de Post Grado

Doctorado en Derecho

TESIS

LA INDEPENDENCIA PERSONAL DEL JUEZ EN
EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANO.

Para Optar el Grado Académico de:
DOCTOR EN DERECHO

AUTOR

Mg. GONZALEZ AGUIRRE, Cesar Orlando

ASESOR

Dr. ALVARADO VARA, Lenin Domingo

Huánuco - Perú
2019



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CC.PP.

ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO

En la ciudad de Huánuco, Auditorio de la Universidad de Huánuco, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las 08:00 horas, los Jurados, docentes en la Universidad de Huánuco, **Dr. Rodolfo José ESPINOZA ZEVALLOS**, Presidente, **Dr. Tony SOLANO PÉREZ**, Secretario, y **Dra. Roció del Pilar CARRILLO ARTEAGA**, Vocal, respectivamente; nombrados mediante **Resolución N° 314-2019-D-EPG-UDH**, de fecha veintiuno de junio del año dos mil diecinueve y el aspirante al Grado Académico de **Doctor en Derecho**, **Mg. Cesar Orlando GONZALEZ AGUIRRE**.

Luego de la instalación y verificación de los documentos correspondientes, el Presidente del jurado invitó al graduando a proceder la exposición y defensa de su tesis intitulada. "**LA INDEPENDENCIA PERSONAL DEL JUEZ EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANO**", para optar el Grado Académico de **Doctor en Derecho**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, luego el Presidente del jurado comunicó el resultado, habiendo obtenido la nota 17 **cualitativa** de DIECISIETE; con la calificación **cuantitativa** de (en letras) DIECISIETE; al mismo tiempo recomendó a la Escuela de Post Grado, se le otorgue el grado académico de **Doctor en Derecho**, al graduando **Mg. Cesar Orlando GONZALEZ AGUIRRE**.

Se suscribe la presente Acta en tres originales y siendo las 10:00 horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.

PRESIDENTE

Dr. Rodolfo José ESPINOZA ZEVALLOS

SECRETARIO

Dr. Tony SOLANO PÉREZ

VOCAL

Dra. Roció del Pilar CARRILLO ARTEAGA

DEDICATORIA

El presente trabajo de grado va dedicado a Dios, quien como guía estuvo presente en el caminar de mi vida, bendiciéndome y dándome fuerzas para alcanzar mis metas trazadas sin desfallecer.

A Dany y nuestro amado hijo César Daniel, por estar a mi lado en momentos difíciles y hermosos de mi vida.

César Orlando.

AGRADECIMIENTO

Expresar mi gratitud a Dios, por llenar mi vida de su misericordiosa bendición.

A mis colegas Magistrados y personal judicial de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, por otorgarme su confianza, abrirme las puertas y permitirme realizar la presente investigación dentro de este recinto institucional.

RESUMEN

En esta investigación se estudió la independencia personal del juez en el sistema de justicia peruano, con la finalidad de establecer en qué medida los precedentes vinculantes influyen en su independencia personal y en la mejora de la seguridad jurídica en la impartición de justicia peruana. Se elaboró y aplicó un cuestionario a los abogados del Distrito Judicial de Huánuco y jueces de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, se analizó la legislación peruana y extranjera sobre la independencia personal del juez, mediante los métodos dogmático y hermenéutico. Se concluyó que: la normatividad constitucional y orgánica reconoce independencia a los magistrados, pero ello en la práctica no se percibe en la sociedad, existiendo una clara sensación de intromisión política, mediática y un manifiesto direccionamiento de las instancias superiores sobre su ejercicio jurisdiccional mediante la imposición de precedentes con calidad de vinculantes, los cuales no dejarían margen de una actuación independiente desde el plano de la interpretación argumentativa inherente a su naturaleza funcional. En contraste y quizá agudizando el problema, también se advierte que los Jueces si se apartan de los criterios jurisprudenciales debido a la presión política de los grupos de poder, pero esto obedece a otras razones que no se aborda a fondo en la presente investigación, sino se circunscribe al estudio de si en verdad los precedentes vinculantes constituyen una intromisión en el ejercicio jurisdiccional de los jueces afectando su independencia funcional que le reconoce la Constitución y que le pone como límite a su actuación a la propia Constitución y la ley, o más bien es valiosa la incorporación de precedentes porque ayudan a la seguridad jurídica mediante una justicia predecible que en todo caso hace objetivo

la aplicación del principio de igualdad, por lo tanto no es ni lejano pensar que la imposición en su cumplimiento sea una intromisión y afectación a la independencia personal del juez.

Palabras clave: El precedente Constitucional, El precedente Judicial, Democracia, Poder Judicial, Independencia judicial, Independencia e imparcialidad.

SUMARY

In this investigation the personal independence of the Judge in the Peruvian justice system was studied, in order to establish to what extent the binding precedents influence their personal independence and the improvement of legal security in the Peruvian justice system. A questionnaire was prepared and applied to the lawyers of the Judicial District of Huánuco and judges of the Superior Court of Justice of Huánuco. The Peruvian and foreign legislation on the personal independence of the Judge was analyzed through dogmatic and hermeneutical methods. It was concluded that: the constitutional and organic norms recognize the independence of magistrates, but in practice this is not perceived in society, there being a clear sense of political, media, and a manifest direction of the higher instances over their jurisdictional exercise through the imposition of precedents with quality of binding, which would leave no room for independent action from the level of argumentative interpretation inherent in its functional nature. In contrast and perhaps sharpening the problem, it also warns that Judges if they depart from the jurisprudential criteria due to political pressure from the groups of power, but this is due to other reasons that are not addressed in depth in the present investigation, but it is confined to the study of whether in fact the binding precedents constitute an interference in the jurisdictional exercise of the Judges, affecting their functional independence that the Constitution recognizes and which limits their actions to the Constitution and the law, or rather the incorporation of precedents is valuable because they help legal security through a predictable justice that in any case makes the application of the principle of equality objective, therefore it is not far from thinking that the imposition in its fulfillment is an interference and affectation to the personal independence of the Judge.

Keywords: The Constitutional precedent, Judicial precedent, Democracy, Judicial Power, Judicial Independence, Independence and impartiality.

RESUMO

Nesta investigação foi estudada a independência pessoal do juiz no sistema judiciário peruano, a fim de estabelecer em que medida os precedentes vinculantes influenciam sua independência pessoal e a melhoria da segurança jurídica na entrega da justiça peruana. Um questionário foi elaborado e aplicado aos advogados do Distrito Judicial de Huánuco e juízes do Tribunal Superior de Justiça de Huánuco, analisando-se a legislação peruana e estrangeira sobre a independência pessoal do juiz, por meio de métodos dogmáticos e hermenêuticos. Concluiu-se que: os regulamentos constitucionais e orgânicos reconhecem a independência dos magistrados, mas na prática isso não é percebido na sociedade, há um claro sentido de interferência política, da mídia e uma direção clara das instâncias superiores em seu exercício jurisdicional através de imposição de precedentes com qualidade vinculativa, que não deixaria espaço para a ação independente do nível de interpretação argumentativa inerente à sua natureza funcional. Em contraste e talvez aguçando o problema, também é notado que os Juízes se desviam dos critérios jurisprudenciais devido à pressão política dos grupos de poder, mas isto é devido a outras razões que não são abordadas em profundidade na presente investigação, mas Limita-se ao estudo de se os precedentes obrigatórios constituem realmente uma interferência no exercício jurisdicional dos juízes que afetam sua independência funcional reconhecida pela Constituição e que limita o cumprimento da Constituição e da própria lei, ou melhor, A incorporação de precedentes é valiosa porque eles ajudam a segurança jurídica através de justiça previsível que, em qualquer caso, torna a aplicação do princípio da igualdade objetiva, portanto, não está longe de pensar que a imposição em seu cumprimento é uma interferência e afetação à independência pessoal do juiz.

Palavras-chave: O precedente constitucional, o precedente judicial, Democracia, Poder Judiciário, Independência Judiciária, Independência e imparcialidade.

INTRODUCCIÓN

Creemos que la independencia personal del juez en el sistema de justicia peruano como en toda sociedad, pone de relieve y es reflejo de la garantía que presta una vida social en democracia, pues solo así se puede lograr que el servicio de impartición de justicia sea igual para todos los ciudadanos. La administración de justicia es el fundamento de la democracia y esta a su vez es pilar y garantía de un sistema de justicia independiente. Por eso se dice, que las democracias modernas se desenvuelven en base a la idea del Estado Constitucional de Derecho.

El Estado Constitucional de Derecho es aquél que ha transformado la visión propia del Estado Legal de Derecho, es decir, hoy estamos frente al gobierno de los hombres personificado en la labor que cumplen los jueces que reemplazó a la idea del gobierno de las leyes o del imperio de la ley, contexto en el cual los jueces estaban limitados en su interpretación y a la sola aplicación de las leyes dictadas por el parlamento.

El Estado Constitucional o Estado Constitucional de Derecho, permite y exige el imperio de los derechos fundamentales basado en la existencia de una Norma Fundamental o Constitución invasora de la actuación de los poderes públicos y privados, limitando el poder por el poder, suprimiendo la arbitrariedad que pone en riesgo la democracia que inspira una vida sobre la idea de una vida digna. De ahí, la importancia de un juez, que en su persona la sociedad le deposita su confianza para hacer prevalecer los derechos ciudadanos como su vida, su

libertad y sus posesiones (propiedad o titularidad de sus derechos), los mismos que le fueran otorgadas para una vida ordenada con respeto y tolerancia, pero, que cuando esos derechos subjetivos no sean respetados espontáneamente y son amenazados, corresponde al Estado reestablecer ese orden y reponer esos derechos a quien le corresponde, valiéndose para ello de un sistema de justicia dirigido por un juez quién le inviste de poder para impartir justicia en nombre del pueblo haciendo cumplir la Constitución y la ley, mediante los valores y principios que rigen racional y razonablemente la vida en sociedad.

Así, en el caso peruano el artículo 138 de la Constitución Política, declara reconociendo que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”; y precisamente cuando dice que se ejerce mediante órganos jerárquicos del Poder Judicial, no está sino reconociendo que son los jueces quienes deben hacer cumplir la Constitución y las leyes, de ahí que también se reconoce la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional para la tutela de las libertades fundamentales o protección de los derechos subjetivos de las personas mediante un proceso justo o debido proceso.

Entonces, no cabe duda que la función jurisdiccional como actividad de los jueces, tiene que prestar las mínimas garantías que importan un debido proceso y para ello se ha reconocido como principio y derecho de la función jurisdiccional la independencia de los jueces, independencia funcional que debe estar libre de injerencias internas y externas, sean factores administrativos, jerárquicos, de grupos de poder económico, sociales, políticos o de cualquier índole.

En la presente investigación los precedentes vinculantes no constituyen afectación a la independencia personal de los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sino suma a una justicia que hace prevalecer la seguridad jurídica sobre criterios predecibles y el principio de igualdad, más si la independencia de la función jurisdiccional está reconocido como derecho constitucional de las personas, es decir esta objetivada a la función misma, más allá y lejos de poder entender como un derecho potestativo o subjetivo de la persona del juez, máxime si la función jurisdiccional que cumplen los jueces constituyen un poder-deber.

Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema: En el Capítulo I, Análisis crítico e integral del problema o descubrimiento, Trascendencia de la investigación: Propuesta doctoral, Prospectiva, Marco lógico, Antecedentes de la Investigación. En el Capítulo II, Se desarrolla la revisión de los Aspectos Teóricos, Conocimientos Teóricos, Epistemológicos, Enfoques, Teorías, Modelos, Fundamentos paradigmáticos. En el Capítulo III, La Metodología y las Técnicas; Las Hipótesis y Variables; Técnicas e Instrumentos utilizados en la investigación. En el Capítulo IV, Se presenta la estructura del contenido o resultados, Descripción de la realidad observada, Estudio de casos, Debates, Contradictorios y Enfoques actuales, Entrevistas, Encuestas, Posiciones y sustento propio de los resultados. En el Capítulo V, Se presenta Fundamentos de la Propuesta o Discusión de Resultados; Finalmente se expone las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y Anexos.

ÍNDICE

| | |
|----------------|------|
| DEDICATORIA | II |
| AGRADECIMIENTO | III |
| RESUMEN | IV |
| SUMARY | VI |
| RESUMO | VII |
| INTRODUCCIÓN | VIII |
| INDICE | XI |

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

| | |
|--|----|
| 1.1. Descripción del problema | 13 |
| 1.2. Formulación del problema | 19 |
| 1.3. Objetivo general | 20 |
| 1.4. Objetivos específicos | 20 |
| 1.5. Trascendencia de la Investigación | 20 |

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2.1. Antecedentes de investigación | 23 |
| 2.2. Bases teóricas | 23 |
| 2.3. Definiciones operacionales | 74 |
| 2.4. Sistema de Hipótesis | 75 |
| 2.5. Sistema de Variables | 76 |
| 2.5.1. Variable independiente | 76 |
| 2.5.2. Variable dependiente | 76 |
| 2.6. Operacionalización de variables | 77 |

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

| | |
|--------------------------------|----|
| 3.1. Tipo de investigación | 78 |
| 3.1.1. Enfoque | 78 |
| 3.1.2. Nivel de investigación | 78 |
| 3.1.3. Diseño de investigación | 79 |

| | |
|--|-----------|
| 3.2. Población y muestra | 79 |
| 3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos | 80 |
| 3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de Información | 81 |

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

| | |
|---|-----------|
| 4.1. Relato y descripción de la realidad observada | 82 |
| 4.2. Conjunto de argumentos organizados | 87 |

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

| | |
|---|------------|
| 5.1. Contrastación de los resultados | 108 |
| CONCLUSIONES | 116 |
| RECOMENDACIONES | 118 |
| REFERENCIA BIBLIOGRAFICA | 119 |
| ANEXOS | 126 |

CAPÍTULO I

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema del presente trabajo de investigación es trascendente y se contextualiza en el ámbito local, regional, nacional e internacional; y para el caso que nos ocupa, la independencia personal del juez en el sistema de justicia peruano depende la seguridad jurídica del país. Todo ciudadano, consciente de la seguridad que le presta el Estado y su sistema de justicia, se desenvuelve en su vida social sabiendo los límites jurídicos de su esfera de actuación y donde se inician los derechos de los demás miembros de la comunidad; es decir, por la seguridad jurídica, sabe que sus derechos terminan donde empieza el derecho de otros; la seguridad otorgada originariamente por el ordenamiento jurídico le permite conocer lo que su manifestación de voluntad le compromete y así asumir las consecuencias jurídicas preestablecidas y conocidas por todos; en otras palabras, por la seguridad jurídica un ciudadano no solo sabe que le está permitido y prohibido, sino que tiene plena confianza que los demás miembros con quienes comparte en su vida de interrelación también actúan con plena consciencia de los límites a su esfera de actuación jurídica. Por lo que, podemos afirmar que la seguridad jurídica garantiza el bienestar social y todos los valores y principios inherentes a un Estado social y democrático.

Así descrita la finalidad de la seguridad jurídica, parece irrealizable, para ello pues como sugiere el profesor Guido Calabressi se requiere que el respeto

de los derechos subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico deben ser cumplidos espontáneamente, lo cual no sucede por diversos factores propios de la interrelación social; esta situación da lugar a que el mismo Estado intervenga para imponer ese respeto y cumplimiento mediante reglas de preferencia de derechos, preferencia que deberán ser recreadas por los jueces mediante una interpretación argumentativa plasmadas en sus resoluciones o sentencias que darán solución a los conflictos de intereses.

Pero, claro está, para ello será necesario de un ordenamiento jurídico que reúna esa característica llamada plenitud por el positivismo jurídico, en el sentido de que es completo y que no da espacios vacíos o lagunas a ser complementadas mediante normas resultantes de la interpretación. Empero, este ideal jurídico es utópico, sumado a que el lenguaje común que sirve a la Constitución y las leyes es indeterminado y muchas veces ambiguos. De ahí que, nace la necesidad de contar con una institución que haga concreto el entendimiento a la razón de aquellas normas que garanticen la paz social mediante la justicia como fin último del Derecho contenido también por disposiciones legales escritas. En este contexto, cobra relevancia la figura de un juez como intérprete constitucional y/o de las leyes.

Una de las garantías de las que está investido el juez, se encuentra constituido por su independencia en la solución de los conflictos de intereses que a menudo se producen en la vida de relación en la sociedad, a lo que naturalmente es llamado a pacificar mediante soluciones justas; y es que, esta independencia, en aras de cumplir tal finalidad, exige al juez, que sus

decisiones en cada caso concreto deben presentar argumentos objetivos y razonables que la justifiquen, expresadas con logicidad, sin omitir en tener presente que sin bien resuelve un caso concreto, sin embargo estas son de interés de la sociedad en su conjunto.

En esta tarea, hoy en día, es frecuente que un juez se encuentra con sentencias jurisdiccionales emitidas por el Tribunal Constitucional o por las Salas de la Corte Suprema, dictados en casos concretos, a las cuales se les reconoce la calidad de Precedentes Vinculantes y por lo mismo de obligatorio cumplimiento por parte de todos los jueces de la justicia común, para casos similares futuros. Esta situación viene provocando la reacción de los jueces de mérito de la justicia ordinaria, quiénes, aún sin compartir con los criterios establecidos en los precedentes vinculantes, por disentir total o parcialmente de los mismos o por encontrar argumentos que produzcan una mejor solución, no tienen ni ven otra salida que sujetarse a lo que han predicho con carácter absoluto en otro caso similar los altos tribunales de justicia, llámese Tribunal Constitucional o Salas Supremas del Poder Judicial, no obstante que el artículo 138° de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia se ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes.

Ante el estado de cosas descrito, hay voces que señalan que ello no se condice con un sistema de justicia constitucional propio de un Estado Constitucional Democrático, modelo en el cual se reconoce a los jueces la potestad de fundamentar sus decisiones sobre la Constitución antes que

sobre las leyes y por lo mismo antes que sobre los precedentes vinculantes, ello por cuanto se entiende que éstas no son normas acabadas que tienen que aplicarse en toda realidad, sino más bien tienen que ser interpretadas conforme a la Constitución y de esta manera ser completadas en su contenido por obra de los jueces, quiénes le deberán dar un sentido y un valor si es que tienen que aplicarlas en aras de lograr una solución adecuada y justa al caso concreto.

No se trataría de negar o de restarle importancia a los precedentes vinculantes para un sistema de justicia que tiene la necesidad de inspirar confianza de la sociedad en su jueces, mediante la predictibilidad o previsibilidad de las decisiones judiciales, sino más por el contrario reafirmar y relevar su utilidad y aplicabilidad futura para resolver casos similares, pero, claro está sin que ellas signifiquen una restricción o un marco cerrado que impida la labor interpretativa del juez, máxime si ahí se asienta la independencia personal y funcional del juez, por lo que, siempre debe estar abierto el margen a la actividad creadora del juez en la solución del caso concreto, mediante argumentos constitucionales que sean objetivamente razonables y tengan legitimidad social.

Por consiguiente, es una realidad patente en nuestro país, que se debe admitir y/o reconocer que los precedentes vinculantes en materia jurisdiccional son necesarios y por demás valiosos, más aún si se apunta a consolidar un sistema de justicia propio de un Estado Constitucional, pero se debe tener cuidado que su existencia y necesidad no colisione ni sea

incompatible con el Principio de Independencia, que es inherente y natural a la existencia y razón de ser de un juez, a quién se le ha confiado el poder de impartir justicia, poniendo en sus manos y a su decisión los casos considerados domésticos hasta los más trascendentales de la sociedad, teniendo en esta función como único límite a la Constitución Política del Estado, en la cual se encuentran plasmados los principios y valores más privilegiados por la sociedad en pleno.

Podemos asumir, que uno de los más grandes males que aqueja la administración de justicia en el país, es sin lugar a dudar la falta de seguridad y predictibilidad, empero el remedio que todos queremos encontrar no puede trastocar la institucionalidad democrática, ni puede implicar injerencias en las funciones de los poderes del Estado. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de compatibilizar la existencia de los precedentes con el ejercicio mismo de la función jurisdiccional con independencia.

Ahora, sobre la problemática que engloba la existencia de los precedentes vinculantes y su injerencia en la independencia del juez se ha formado dos posturas claramente definidas, una de ellas encaminada a justificar su existencia y la configuración que el Tribunal ha ofrecido de ellos, mientras que la otra postula un rechazo a la delimitación efectuada por el intérprete de la Constitución y que en los precedentes así entendidos son un peligro para la independencia personal del juez.

Desde una postura crítica Eugenia Ariano señala que parece realmente intolerable pensar que en nuestro sistema jurídico sea constitucionalmente legítimo la imposición al juez de los precedentes vinculantes, ya que esos supuestos precedentes vinculantes, constituyen más bien ilegítimas imposiciones verticales (o sea autoritarias) que atentan contra la independencia judicial.

De igual parecer es Juan Monroy, para quien el precedente vinculante es obligatorio en los términos de un mandato inexorable que debe ser seguido ‘sin dudas ni murmuraciones’ o que puede dar lugar a la anulación de las decisiones que la desconocieron”.

Desde otra posición, Aníbal Torres refiere que los jueces de todas las instancias judiciales no pueden desvincularse de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, enfatizando bajo responsabilidad, por cuanto, están en la obligación de administrar justicia con sujeción a la Constitución y a las leyes.

Para Pedro Grández el precedente peruano regulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional se trata de un modelo en el que al final de cuentas antes que un referente obligado para establecer la eficacia vinculante de los precedentes, se convierte a veces en un simple dato para que el Tribunal Constitucional pueda legislar.

Jorge Santistevan indica que la experiencia acumulada en la fijación y aplicación de los precedentes vinculantes de carácter normativo aconseja que se vaya reduciendo la enorme discrecionalidad de la que hasta el presente ha venido gozando el Tribunal Constitucional.

En este contexto, nuestra investigación a diferencia de las posturas esbozadas no está orientada al estudio de los precedentes desde la óptica de la teoría general del derecho, sino de la política jurisdiccional, pues, nuestro cometido está orientado a encontrar los límites normativos que permitan compatibilizar la existencia del precedente con la independencia del juez en el ejercicio de su funciones.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General

PG.₁: ¿En qué medida los precedentes vinculantes influyen en la independencia personal del juez y en la mejora de la seguridad jurídica en la impartición de la justicia peruana?

1.2.2. Problemas específicos

PE.₁ ¿De qué manera la imposición obligatoria de los precedentes vinculantes influye en la independencia del juez?

PE.₂ ¿En qué medida la independencia del juez se encuentra proclamada en la Constitución y otras leyes?

PE.₃ ¿En qué medida la competencia dada por ley al juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento?

1.3. OBJETIVO GENERAL

OG.1: Establecer en qué medida los precedentes vinculantes influyen en la independencia personal del juez y en la mejora de la seguridad jurídica en la impartición de la justicia peruana.

1.4. Objetivos específicos

OE.1 Determinar de qué manera la imposición obligatoria de los precedentes vinculantes influye en la independencia personal del juez.

O.E.2 Establecer en qué medida la independencia del juez se encuentra proclamada en la constitución y otras leyes.

OE.3 Conocer en qué medida la competencia dada por ley al Juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento.

1.5. TRASCENDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN:

La investigación se orienta a describir, precisar, esclarecer y analizar esta nueva problemática que se viene planteando con relación a la independencia personal del juez, a la par que se viene desarrollando en la función jurisdiccional nuevas instituciones que contienen nuevas ideas y conceptos con respecto a la predictibilidad en las soluciones que se vienen dando a diversos conflictos de intereses de cara a encontrar seguridad jurídica, tales como stare decisis , ratio decidendi, obiter dicta, overruling, entre otros.

La investigación sobre la independencia personal del juez en el sistema de justicia peruano a propósito de los precedentes vinculantes como base de la seguridad jurídica tiene bastante relevancia teórica porque es una novedad en la literatura jurídica del país, pues, en ninguna biblioteca jurídica local, regional o nacional existe, o no se encuentra ningún estudio sobre la independencia personal del juez desde una óptica de la función jurisdiccional a propósito de su vinculación al criterio jurisdiccional establecidos mediante los precedentes dictados por los altos tribunales de justicia de la Nación como las Salas Supremas de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, cuanto más su relación con la institución constitucional de seguridad jurídica, pues, el estudio de la independencia del juez, no es en alusión sobre el comportamiento y responsabilidad de los jueces, sino se trata de un poder-deber funcional y como derecho de toda persona a un juez imparcial e independiente.

Tanto más, conscientes del valor de los precedentes vinculantes para un sistema de justicia previsible, su imposición para su cumplimiento obligatorio por los jueces de la justicia ordinaria no puede crear especulaciones con relación a que su observancia significa una intromisión en la libertad de los jueces reconocidas en el poder-deber de la administración de justicia y más por el contrario deberá admitirse su importancia para la seguridad jurídica frente a la ruptura del ordenamiento jurídico y que concebida la independencia del juez desde el plano objetivo como un derecho constitucional a una función jurisdiccional debida, deberá asumirse la exigencia jurídica y social de un servicio de justicia previsible y predecible

que brinde igualdad en la aplicación de la ley, más allá de querer ver en dicha independencia constitucional un derecho subjetivo o potestativo del juez.

En este contexto resulta pertinente el encontrar una respuesta a la interrogante planteada, ya que ello nos permitirá determinar normativamente los alcances y efectos de los Precedentes Vinculantes, precisando que deben ser interpretados y aplicados de conformidad con la Constitución Política del Estado, sin que ello signifique afectación al principio de independencia personal del juez.

Además, la investigación sobre la independencia personal del juez tiene relevancia académica, porque a partir de la sustentación de la tesis, nuestra Universidad de Huánuco, podrá en su Facultad de derecho y Ciencias Políticas difundir el concepto de independencia personal del juez aunado a conceptos como la seguridad jurídica como una Institución de carácter constitucional, tan importante como parte insustituible de las garantías fundamentales de la persona humana. Siendo así, la relevancia académica es desde ya predecible.

CAPITULO II

II. MARCO TEORICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Se debe indicar que las investigaciones o libros que hayan abordado el problema materia de la investigación son muy pocos, toda vez que el tema es novedoso y probablemente no se ha advertido la deficiencia o vacío legal existente con relación a los precedentes vinculantes, siendo pertinente realizar esta investigación desde sus inicios, a efectos de plantear una solución.

2.2. BASES TEÓRICAS

La institución jurídica del precedente, hoy tiene vigencia en los sistemas jurídicos pertenecientes a la familia del civil law o continental (Romano-Germánico), pudiéndose ver en su función jurisdiccional que han dado giro al establecimiento de precedentes como en el caso peruano llamado precedente vinculante, con la cual buscan dotar a la administración de justicia la ansiada predictibilidad en las decisiones judiciales, partiendo para ello de la fijación de criterios jurisdiccionales o jurisprudenciales con fuerza vinculante en sentido horizontal y vertical, esto es a ser observada en su cumplimiento por todas las instancias jurisdiccionales sean del mismo y de inferior jerarquía o nivel funcional. En este sentido, refiere Francisco Zúñiga, “los sistemas o familias de Derecho de “Common Law” y de “Románico-Germánico” han tenido convergencias en relación al valor de la

jurisprudencia como fuente del derecho y al valor del precedente, en especial en el campo de la jurisdicción constitucional en general y del control de constitucionalidad en particular”.

En este contexto hay necesidad de conocer los alcances del precedente vinculante tal como se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico peruano, debiendo previamente para ello estudiar sus orígenes en la tradición jurídica del common law y su posterior trasplante en la tradición jurídica Románico-Germánico donde como sabemos la ley constituye la fuente principal del Derecho pasando a otro plano como fuente auxiliar los criterios jurisprudenciales dictados por los altos tribunales de justicia de la República, como por ejemplo por las Salas de la Corte Suprema.

2.2.1. Noción de Estado Constitucional.

“El Estado constitucional más que una continuación del Estado de derecho se trata de una profunda transformación que incluso afecta necesariamente a la concepción del derecho”. (ZAGREBELSKY, G. (2008), pág. 33).

Bajo esta premisa, podemos identificar dos modelos o paradigmas de Estado: el Estado de derecho y el Estado constitucional, cada cual con sus métodos, expectativas y estilos jurídicos distintos, es decir, cada cual responde a una mentalidad distinta de concebir el derecho.

“En estos momentos es común hablar del ‘Estado constitucional’ como algo diferente del ‘Estado de derecho’ y referirse a los cambios que esta transición está suponiendo en la concepción del derecho y del método jurídico. Si el modelo de Estado de derecho (o Estado legal de derecho) gravitaba en torno a la idea de imperio de la ley, el modelo de Estado constitucional (o Estado constitucional de derecho) gravita en torno al carácter normativo (regulativo) de la Constitución (“La Constitución como norma jurídica”). (AGUILO, J. (2004), pág. 9).

Entonces una de las ideas claves para entender ambos modelos de Estado, dependerá del carácter y ubicación de la Constitución. Es arraigado, que en el modelo del Estado legal de derecho la Constitución se ubica en la cúspide de los ordenamientos jurídicos o de la denominada pirámide kelseneana y se constituye como una norma fundamental que sirve como parámetro de validez formal de las demás normas reglas, así, también la Constitución solo tiene el carácter de reglas que contiene meras declaraciones de reconocimiento de derechos individuales, vale decir, es una ley más; entonces suele decirse que en el Estado de Derecho impera el “gobierno de las leyes”. Mientras tanto la Constitución de un Estado Constitucional donde impera el “gobierno de los hombres”, se caracteriza por reconocer aquellos principios y valores que la sociedad en su conjunto comparte y privilegia, los cuales están representados por el reconocimiento de los derechos fundamentales

como principios que se hallan en constante dinamismo para limitar el abuso del poder.

Con la expresión 'Estado de derecho' se entienden, habitualmente, en el uso corriente, dos cosas diferentes que es oportuno distinguir con rigor. En sentido lato, débil o formal, 'Estado de derecho' designa cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. En este sentido, correspondiente al uso alemán del término *rechtsstaat*, son estados de derecho todos los ordenamientos jurídicos modernos, incluso los más antiliberales, en los que los poderes públicos tienen una fuente y una forma legal. En un segundo sentido, fuerte o sustancial, 'Estado de Derecho' designa, en cambio, solo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están, además sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, sino también en los contenidos. En este significado más restringido, que es el predominante en el uso italiano, son estados de derecho aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, incluido el legislativo, están vinculados al respeto de principios sustanciales, establecidos por las normas constitucionales, como la división de poderes y los derechos fundamentales". (FERRAJOLI, L., (2009). (pág. 13).

Haciendo un poco de historia, la vigencia del Estado de derecho (Estado legal de derecho) se impone como consecuencia de la

revolución liberal francesa para derrotar el régimen sucedida en el año 1789, justificada en alcanzar el bienestar común, esto es como respuesta a una forma de gobierno caracterizado por la tiranía y despotismo del poder ejercido por la sola voluntad del rey; de modo que, en adelante el ejercicio del poder se centraría en manos de una Asamblea Constituyente para dar paso al “gobierno de las leyes”, lo que implicaba que a partir de allí, todos los actos del poder público solo tenían validez en tanto se encontraban previamente recogidos o regulados en la ley, norma que se convertía así como el límite al arbitrio de la voluntad soberana del rey.

“De este modo, el Estado de derecho asumía un significado que comprendía la representación electiva, los derechos de los ciudadanos y la separación de poderes; un significado particularmente orientado a la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la administración”. **(ZAGREBELSKY, G. (2008), pág. 23).**

Es decir, en el Estado de legal de derecho la ley se constituía en garante de los derechos ciudadanos, ya que se había producido una inversión en la relación poder y Estado, la cual conllevaba a la idea de que ahora el Estado existía en bienestar de la sociedad de cara a satisfacer sus demandas y/o exigencias, más ya no en la concentración de poder en la autoridad soberana de sus gobernantes. De esta manera, es como se implanta, el régimen liberal del Estado Legislativo, con primacía absoluta de la voluntad del pueblo,

expresada en las leyes dictadas por sus representantes ante un parlamento, que a la vez se constituía en el espacio deliberativo de las exigencias sociales.

El Estado de derecho o Estado legal de derecho se caracteriza por: a) la supremacía de la ley sobre la administración; b) la subordinación a la ley, y solo a la ley, de los derechos de los ciudadanos, con exclusión; c) la presencia de jueces independientes con competencia exclusiva para aplicar la ley, y solo la ley, a las controversias surgidas entre estos y la administración del Estado. **(ZAGREBELSKY, G. (2008), pág. 33).**

Como corolario de estas características podemos señalar que la ley se adjudica como fuente principal del derecho y por lo mismo se exige que los operadores jurídicos se limiten a aplicarla sin márgenes de interpretación más que allá el método literal o exegético, bajo el fundado riesgo de desautorizar o tergiversar la voluntad del legislador, quien de esta manera asume un papel preponderante como único productor del derecho en su aspecto normativo mediante la dación de leyes, que deberían ser acatadas a la letra sí o sí por los poderes públicos y por los ciudadanos o ente privados.

“El Estado de derecho es aquél en el que el poder actúa conforme a Derecho, o a la ley en sentido amplio, a normas jurídicas pre constituidas, y responde a la idea de gobierno *sub leges y per leges*:

el gobierno de la ley frente al gobierno de los hombres”. **(GASCÓN ABELLÁN M, y GARCÍA FIGUEROA A, (2005), (pág. 19).**

“En lo que particularmente interesa a la función jurisdiccional o más propiamente a labor que cumple el juez, los jueces de la Nación no son, como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes”. **(LÓPEZ GUERRA, L., (2001)).**

El Estado constitucional o Estado constitucional de derecho, entonces, se concibe como un modelo de Estado que se caracteriza por presentar principios que satisfacen la dignidad humana, ello en un espacio de estructura pluralista donde convergen la cultura y los derechos fundamentales, bajo la aquiescencia de la tolerancia recíproca entre los miembros de la comunidad, sobre la base de los principios y valores creados, aceptados y compartidos como resultado de un pacto social que se encuentran plasmadas en la Constitución como mandatos de optimización y que exigen su concretización para el bienestar de la comunidad.

“La doctrina mayoritaria, ha dejado sentado que las características paradigmáticas para identificar a los Estados constitucionales son:

a) Reconocen a nivel constitucional un catálogo de derechos fundamentales que actúan como parámetro de validez de los actos (normativos o no) de los poderes públicos o privados.

b) Cuentan con constituciones rígidas, es decir, con constituciones cuyo procedimiento de reforma es más complejo que la reforma legislativa.

c) Cuentan con un control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes y los actos del poder”. **(RODRÍGUEZ SANTANDER, R., (2010), pag. 46).**

“En el sistema jurídico de Alemania creemos válido para todo sistema jurídico los derechos fundamentales se caracterizan por cuatro extremos: se regulan con rango máximo, por su máxima fuerza jurídica, por la máxima importancia de sus contenidos u objeto y por su máximo grado de indeterminación”. **(ALEXY, R (2003), pág 32-35).**

En lo que respecta al control de jurisdiccional de las leyes y los actos de poder, es que es inherente al Estado constitucional el equilibrio, el mismo que permite a los tribunales jurisdiccionales o constitucionales someter a control de constitucionalidad las normas o reglas que afectan los principios y valores que recoge la Constitución, estando facultados para inaplicar o expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas dictadas por el legislativo en contradicción o incompatibles con los derechos fundamentales o propiamente con la Constitución. Es decir, en un Estado Constitucional todos los poderes, sean públicos o privados se encuentran limitados por la Constitución y ello se concretiza en la labor de la interpretación constitucional que cumplen los jueces sean ordinarios o constitucionales. Por ello, “la sujeción del juez ya no es, como en el viejo paradigma positivista,

sujeción a la letra de la ley, cualquiera que fuese su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la Constitución”. **(FERRAJOLI, L., (1999), pag. 26).**

Finalmente, podemos afirmar que “la concepción que ha propiciado el surgimiento del paradigma del Estado Constitucional, esto es, el constitucionalismo no sólo encarna un nuevo modelo de Estado o una peculiar forma de concebir la política, sino que incluso ha dado lugar al surgimiento de una nueva cultura jurídica, el neo constitucionalismo”. **(PRIETO SANCHIS, L., (2004), pág. 47).**

2.2.2. Modelos del Estado Constitucional

La vida en relación en comunidad, requiere de armonía y paz social, por lo que cuando esa armonía se desestabiliza o se resquebraja por conflictos de intereses originados en la carencia de recursos, también requiere de un órgano de control social racional, el cual está constituido por el servicio de justicia presidida por los jueces, ello como mecanismo independiente, pero, que forma parte del Estado. Es así, como los jueces encargados de impartir justicia, intervienen en los litigios que se le someten a su conocimiento, pronunciando el derecho o imponiendo la sanción, según sea la materia y la norma aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta para ello como límites los principios y valores que la sociedad en su conjunto privilegia y comparte, los cuales de manera explícita o implícita se encuentran recogidas en una ley fundamental llamada Constitución.

Entonces, son los jueces ordinarios o especiales, quiénes se constituyen en máximos protagonistas para la concretización de los derechos fundamentales, por lo que radicarán en sus calidades personales y morales, la confianza de la sociedad en pleno para someter a su conocimiento y arbitrio la solución de sus problemas, que involucren intereses desde los más domésticos hasta los más trascendentales como la libertad y su propiedad, incluso su vida misma. “La aplicación judicial del derecho se encuentra sujeta a normas, y a normas a veces muy restrictivas acerca de los supuestos y formas de la intervención, pero es potencialmente ilimitada en el sentido de que, desde el más resonante conflicto político a la más nimia actuación administrativa o incluso relación jurídico privada, no hay esfera en la que la preceptiva constitucional no tenga algo que decir; y son precisamente los jueces quienes lo dicen, empleando para ello delicadas técnicas interpretativas en las que la distancia que separa una argumentación racional a partir de la Constitución de una decisión subjetiva es con frecuencia demasiado tenue”. **(PRIETO SANCHÍS, L., (2000), pág. 188).**

La constitucionalización del ordenamiento jurídico debe de ser entendida como un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente “impregnado” por las normas constitucionales. Por ello para poder calificar a un ordenamiento como constitucionalizado, debe contar con

una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales.

2.2.3. La función jurisdiccional como un poder del Estado

En sus inicios, la justicia institucionalizada ha sido parte del poder constituido y representada por los reyes o soberanos en las monarquías. En Roma, por ejemplo, quienes ejercían una función pública, las autoridades investidas de mando y jurisdicción, recibían el nombre de magistrados, como los cónsules, tribunos, pretores y ediles. Posteriormente, el desarrollo de la sociedad y la afirmación democrática como forma de organización del Estado ha determinado un sistema de funcionamiento basado en la división y equilibrio de poderes, en el cual el magistrado, como agente vinculado a la administración de justicia, es dotado de autonomía e independencia respecto de los demás poderes del Estado con el propósito de garantizar su desempeño imparcial y equitativo.

En esta medida, el juez sea cual fuere su jerarquía – que no respeta su condición de autoridad, que utiliza el poder que el Estado le ha dado para fines distintos a la justicia y solución de conflictos, no sólo constituye un peligro para los justiciables sino para la estabilidad social y para la viabilidad democrática del país.

Por ello, se dice que la democracia es la organización política de la libertad; sin un ejercicio efectivo de la libertad y sin un Poder Judicial independiente que la garantice, no puede haber democracia. El magistrado, entonces, es parte esencial de la existencia misma de un verdadero Estado democrático. El ideal de una democracia es que entre el individuo y la coacción estatal se interponga siempre un juez, que actúe con independencia y garantice el derecho de toda persona a un proceso debido en protección de un derecho amenazado (individual o colectivo).

La Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 establece, que, entre los elementos de una Democracia representativa, se debe contar con la “separación e independencia de los poderes públicos”. Empero la independencia del Poder Judicial no sólo debe verse como la independencia del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado (independencia orgánica); sino también como la independencia de cada juez al interior del Poder Judicial (independencia funcional).

Para los fines y objetivos del presente trabajo, debe entenderse a la autonomía o independencia del Poder Judicial no solo como una entidad que sopesa usualmente frente a los otros poderes del Estado (independencia orgánica); sino que también debe ser analizada de una forma más compleja; toda vez que la independencia funcional del juez al momento de juzgar es una cualidad personal de tal

importancia, que llega a ser considerada como una “condición fundamental de toda administración de justicia democrática.

Por ello, resulta válido preguntarnos para qué sirve la independencia judicial, y como trataremos de dejar en claro, se supone que ella contribuye a la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y a la protección de derechos de las personas frente al Estado, resaltándose a lo largo del presente comentario, la protección del derecho de las personas frente al Estado, toda vez que muchas veces las instituciones gubernamentales restringen derechos de grupos minoritarios, de los que no tienen poder político o económico.

En suma, la independencia del Poder Judicial no debe entenderse sólo como un derecho de los jueces y los abogados; sino sobre todo como un derecho de la sociedad, en el entendido que la justicia es y debe preceptuarse como un servicio público para todos.

2.2.4. Principios Constitucionales de la función jurisdiccional

El poder de impartir justicia emana del pueblo. Esta premisa lleva en primer lugar a aceptar que los cánones que orientan la función de impartir justicia necesariamente deben obedecer a principios acordados por la sociedad en su conjunto y que por antonomasia se hallan recogidos en una Constitución o ley fundamental; y, en segundo lugar, asumiendo que la función jurisdiccional o el poder de impartir justicia implica el pleno respeto de los derechos fundamentales, tales principios producto de un acuerdo democrático

requieren ser concretizados por quiénes son llamados a cumplir esa delicada función, es decir, por lo jueces.

Es común en los Estados Constitucionales, que sus constituciones en mayor o menor grado de taxatividad reconocen un catálogo de principios inherentes a la función jurisdiccional. “Las garantías jurisdiccionales se articulan en una serie de subgarantías de carácter específicamente procesal, como las que habitualmente se reconocen en las normas constitucionales o en los principios fundamentales del proceso”. **(TARUFFO M., (2009), pág. 21).**

Así, constitucionalmente encontramos enunciados principistas entre otros como el de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la cosa juzgada, la publicidad y motivación de las resoluciones, de la pluralidad de instancias, la de no dejar impartir justicia por defectos o vacíos de la ley, del derecho de defensa, de la gratuidad de la impartición de justicia y otros primordiales en relación a la justicia penal y los imputados.

Antes de entrar a estudiar los principios de independencia e imparcialidad, sobre las cuales versa el presente trabajo en relación a saber si los mismos se verían afectados por los precedentes vinculantes establecidos con fuerza de ley por el Tribunal

Constitucional peruano en el marco del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, así como en su caso por aquellos precedentes vinculantes dispuestos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República en virtud del artículo 301 A del Código de Procedimientos Penales, realizaremos una revisión superficial respecto de los principios incardinados en el quehacer de la función jurisdiccional, así como de aquellos relacionados propiamente con la justicia penal; siguiendo para ello, en el caso peruano, el artículo 139° de la Constitución Política del Perú en cuanto reconoce determinados principios como derechos y garantías de la función jurisdiccional.

2.2.5. Principio de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

Hace referencia al juez natural aquel que se encuentra investido de jurisdicción y competencia para conocer válidamente un proceso. Suele señalarse que mediante este principio nadie puede ser desviado de la justicia ordinaria y de dentro de ella sólo se puede ser juzgado por aquel juez reconocido por ley, esto es por aquel predeterminado por ley, que goza de competencia por razones de territorio, de especialidad, por la naturaleza de las materias a conocer y en razón de sus grados y jerarquías. Además, el principio de exclusividad no se permite que existan procesos judiciales por comisión o delegación. “La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional se entiende como la estructura orgánica y jerarquizada del Poder Judicial”. **(VIDAL RAMIREZ, F., (2005), pág. 486).**

2.2.6. Principio del debido proceso

Significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos fundamentales. Para el Tribunal Constitucional el contenido del debido proceso comprende una serie de garantías formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos; así dicho órgano constitucional ha señalado que el debido proceso en su faz sustantiva “se relaciona con todos los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer”.

Y es que, uno de los contenidos del debido proceso es el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Ilustrativamente, cabe precisar que el debido proceso tiene a su vez dos expresiones: una formal y otra sustantiva; por la primera los principios y las reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la

motivación; por la segunda, se relaciona con los estándares de justicia, como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.

2.2.7. Principio de motivación

Una de las manifestaciones de la garantía del debido proceso judicial está constituida esencialmente por el deber jurídico de los jueces (exigencia que es también para los órganos administrativos) a motivar sus decisiones, esto es, a justificarlas mediante buenas razones y objetivas que lleguen no solo al entendimiento y aceptación de las partes en conflicto, sino de la sociedad misma en su conjunto.

“En suma, el fin último de la motivación es la aceptabilidad de la decisión, de modo que, por los argumentos que resume, resulte racionalmente aceptable por las partes, por los jueces, por la comunidad jurídica y por la opinión pública”.

Ahora, atendiendo a que una de las funciones que cumple la motivación de las decisiones judiciales tiene que ver con el derecho de las partes a conocer las razones que la sustentan a fin de que puedan ejercitar su derecho de contradicción mediante los llamados recursos impugnatorios en caso de que estas les cause agravio, se hace necesario que los jueces al decidir argumenten las razones jurídicas y fácticas que justifiquen las mismas, las cuales además también permitirán su control jurisdiccional por la órganos superiores en caso de ser recurridas.

“La distinción entre explicar y justificar, planteada en el ámbito de la teoría del Derecho, parece ayudar a elaborar un concepto objetivable de justificación racional, que nos conduzca hacia un modelo de “motivación” argumentativa desligada de los prejuicios psicológicos o volitivos del propio Juez. A partir de esta distinción, la estructura de la justificación racional se presenta como modelo de argumentación compleja que debe respetar ciertos estándares institucionales, que exigen racionalidad, suficiencia, completitud, congruencia y razonabilidad”.

De ahí que, es coherente afirmar que en efecto motivar no es explicar sino es justificar, ello mediante una interpretación argumentativa del Derecho y los hechos probados, que tengan en cuenta los valores y principios que la sociedad privilegia.

2.2.8. Principio de no dejar impartir justicia por defectos o vacíos de la Ley

Este principio tiene que ver con el principio de integración en caso de existir deficiencia del texto de la ley o de las denominadas lagunas del Derecho, las cuales impiden la extracción de normas como producto de la interpretación de cara a su aplicación en la solución de un caso concreto.

“La laguna del Derecho puede ser definida como aquel suceso para el cual no existe norma jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la consecuencia prevista, deba añadirse otra no prevista para el mismo supuesto”.
(RUBIO CORREA, M., (2009), pág. 261).

2.2.9. Principio de cosa juzgada

Por este principio, se impide el inicio de un proceso idéntico a otro que ya fue resuelto y cuente con sentencia firme. “(...) si observamos cuál es el fin que las partes persiguen en el proceso, vemos que no es otro que el de obtener del juez una declaración por la cual se decida definitivamente la cuestión litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro (*non bis in ídem*); y que, en caso de contener una condena, pueda ser ejecutada sin nuevas revisiones. Este efecto de la sentencia, sin duda alguna el más importante, es el que se designa con el nombre de cosa juzgada, que significa “juicio dado sobre la litis”, y que se traduce en dos consecuencias prácticas: 1º) La parte condenada o cuya demanda ha sido rechazada, no puede en una nueva instancia discutir la cuestión ya decidida (efecto negativo) y 2º) La parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia, puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea permitido rehusarse a

tener en cuenta esa decisión (efecto positivo) (...). (ALSINA, H., (1961), pág. 122-124).

2.2.10. Principio de la pluralidad de instancias

Implica que un mismo proceso pueda ser conocido por más de un juez, pero distintos del primero, es decir, habilita la posibilidad de que un proceso se articule ante más de un juez, distintos, permitiendo que el poder controle al poder y evitando de esta manera que la resolución agravante a los intereses de las partes devenga inmediata e irreversiblemente en firme.

“En realidad el asegurar una (posible) ulterior instancia (mucho más que la motivación de las resoluciones judiciales) en cuanto permite llevar a conocimiento de otro juez lo resuelto por el primero, es una suerte de “garantía de garantías”, O sea y en buena cuenta una garantía del debido proceso mismo, porque es el más efectivo vehículo para, por un lado, evitar el ejercicio arbitrario del poder por parte del primer juez y, por el otro, para permitir corregir (lo antes posible) los errores del mismo y así evitar que sobre lo resuelto se forme irremediablemente cosa juzgada”. (ARIANO DEHO, E., (2005), pág. 517).

2.2.11. Principio del derecho de defensa

Implica ser escuchado en juicio. El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito

del debido proceso; suele señalarse que en cuanto derecho fundamental se proyecta como principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. El derecho de defensa presenta dos dimensiones: como derecho subjetivo y como garantía del proceso; respecto a la primera, es visto como un derecho fundamental que pertenece a los sujetos procesales, con carácter irrenunciable y su inalienabilidad en el sentido de que no puede ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede serle sustraído ni traspasado a terceros. En su segunda dimensión objetiva, el derecho de defensa constituye requisito para la validez del proceso, aun al margen o sobre la voluntad de las a partes procesales.

2.2.12. Principio de la gratuidad de la impartición de justicia

Tiene que ver propiamente con la gratuidad de la administración de justicia y con la defensa gratuita para las personas de escasos recursos. Así también ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, en el sentido de que este principio por un lado garantiza “El principio de la gratuidad de la administración de justicia... para las personas de escasos recursos”; y, por otro, consagra “... la gratuidad de la administración de justicia... para todos, en los casos que la ley señala”.

Es decir, por el primer supuesto, comporta una concretización del principio de igualdad en el ámbito de la administración de justicia según el cual, no se garantiza a todos los justiciables la gratuidad en la administración de justicia, sino sólo a aquellos que tengan escasos recursos [económicos]; y es que, el principio de igualdad, que subyace en los términos de la gratuidad en la administración de justicia, no obliga a tratar igual a todos siempre y en todos los casos, sino a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Además, implica asegurar a las personas de escasos recursos, el acceso, el planteamiento y la obtención de un fallo judicial que resuelva sus diferencias dentro de un proceso judicial gratuito.

2.2.13. Principio de aplicación de la ley más favorable al procesado

Por este principio es imperativo para el Juez, aplicar la ley que resulte más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes. Esto significa, que ante la existencia de dos o más leyes que resulten aplicables a una misma situación jurídica del procesado, se debe aplicar aquella que le otorgue mayores beneficios; asimismo, se observará el mismo criterio, en caso de duda respecto a la aplicación de ley penal pertinente. En este contexto, debe entenderse también, en caso que una misma disposición legal penal ofrece dudas en relación a su interpretación normativa, es imperativo para el Juez darle el sentido que resulte más favorable al procesado.

2.2.14. Principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal

Este principio por mandato constitucional se hace extensivo a la aplicación de toda norma que restrinja derechos. Es decir, si para resolver un caso concreto hay ausencia de una ley aplicable, empero, existe una ley que es aplicable a otro caso similar, este no podrá ser aplicable por extensión analógica para aquél caso concreto. En su observancia, todo Juez debe recurrir al aforismo de “nullum crimen, nullum poena sine lege” (no hay delito, no hay pena sin ley), esto es, en el ámbito de la justicia penal, las prohibiciones o mandatos deben estar expresados en la ley penal; de ahí que, se hace exigible el cumplimiento del principio penal de legalidad, en el sentido de que se encuentren taxativamente preestablecidos los comportamientos prohibidos y las sanciones ante su comisión.

2.2.15. Indemnización por errores judiciales y detenciones arbitrarias

Reza un principio de deber general “primus non nocere” (primero no hacer daño), por lo que en este orden de ideas verificado un daño a un ciudadano con ocasión de un error de la actividad judicial el Estado promotor y vigilante de la dignidad del ser humano debe garantizar efectivamente que el mismo sea resarcido, más aún si se está frente a una detención arbitraria, esto es, sin razones objetivas que la justifiquen.

2.2.16. Principio de independencia y sumisión a la constitución y la ley

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce como derecho fundamental de las personas los principios de independencia

e imparcialidad de los tribunales de justicia y compatible con este marco jurídico universal de los derechos humanos, las constituciones modernas también reconocen estos principios, los cuales según Taruffo en su obra *Páginas sobre justicia civil* se catapultan como entre los más importantes requisitos de la administración de justicia entre los sistemas jurídicos desarrollados y que por lo tanto no puede obtenerse ninguna protección de derechos en sistemas en los que no se den tales condiciones.

La independencia y la imparcialidad, constituyen tópicos ampliamente aceptados y recurrentemente utilizados, empero su novedad radicaría en conceptualarla desde una perspectiva de la teoría de la argumentación jurídica. El principio de independencia de los jueces puede estudiarse desde perspectivas diferentes, una muy común al verlo como un requisito del Estado de derecho vinculado a la separación de poderes. Pero esta perspectiva comporta el riesgo de identificar (o asimilar) dos cosas que son enteramente diferentes, aunque estén relacionadas entre sí; el principio de independencia de los jueces y el marco institucional adecuado para que los jueces puedan ejercer su independencia. Una prueba de esta tendencia a la asimilación es, por ejemplo, la confusión existente en España es entre la independencia de los jueces cuando realizan actos jurisdiccionales y el autogobierno de los jueces. Este último el autogobierno puede ser un elemento del marco institucional adecuado para que los jueces puedan ejercer su independencia; pero lo que es obvio es que los

jueces no son más independientes por el hecho de que se autogobiernen. Lo mismo ocurre con la inamovilidad y otros tantos elementos del marco institucional que permita o garantice el ejercicio de la independencia. De realizarse esta asimilación habría que concluir cosas tan ridículas como que por el hecho de ser inmovibles los jueces ya son independientes: quede claro pues que una cosa es el principio de independencia y otra el estado de cosas institucionales que hagan posible o facilite esa independencia.

Suele señalarse, que, en un Estado constitucional, en sí la garantía de la independencia no constituye un privilegio y/o prerrogativa excelsa de los jueces, sino por el contrario constituye una de las garantías más importantes con que cuentan los ciudadanos que se encuentran inmersos en un proceso judicial y más allá inclusive constituye pilar básico donde se sustenta el propio Estado Constitucional Democrático, que se pone al servicio del justiciable.

“La función jurisdiccional tiene como base el conocimiento jurídico y no tolera mandatos, esto es, directivas de actuación sobre el modo de proceder en la aplicación del Derecho de cuyo incumplimiento pudieran derivarse consecuencias sancionadoras para el juzgador. Y es que el principio de independencia judicial implica, en definitiva, que el juez sólo puede recibir de la razón y del Derecho las reglas que debe aplicar en el juicio”. **(MARTINEZ ALARCON, M., (2004), pág. 105).**

Por otra parte, también en un Estado Constitucional, el hecho de que una Ley Fundamental prescriba que los jueces cumplen sus funciones con sujeción a la ley y la Constitución, ello no debe suponer que tenga que aplicar ciegamente la ley sino sólo en cuanto que de sus sentidos interpretativos se obtengan normas constitucionales, haciendo uso para ello de su facultad constitucional de control de constitucionalidad de las leyes.

Por su parte el Tribunal Constitucional del Perú ha señalado que el principio de independencia de la función jurisdiccional tiene dos dimensiones: a) Independencia externa, según esta dimensión, la autoridad judicial, en el desarrollo de la función jurisdiccional, no puede sujetarse a ningún interés que provenga de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un caso en un determinado sentido. Las decisiones de la autoridad judicial, ya sea que ésta se desempeñe en la especialidad constitucional, civil, penal, penal militar, laboral, entre otras, no pueden depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta y, b) Independencia interna, de acuerdo con esta dimensión, la independencia judicial implica, entre otros aspectos, que, dentro de la organización judicial: 1) la autoridad judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional, no

puede sujetarse a la voluntad de otros órganos judiciales, salvo que medie un medio impugnatorio; y, 2) que la autoridad judicial, en el desempeño de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a los intereses de órganos administrativos de gobierno que existan dentro de la organización judicial.

2.2.17. Imparcialidad

La función jurisdiccional en un Estado constitucional, tiene como protagonistas principales a los jueces, a quienes se les reconoce que cumplen un papel creativo del Derecho sobre la base de una interpretación argumentativa de las normas que el propio Estado le ha confiado. Pero, el juez no deja de ser humano, de modo que cabe que estos falten a su deber de neutralidad en su función de impartir justicia con sus decisiones, es por eso que se exige en ellos, que cuenten con un sentido bien definido sobre lo justo y lo moral.

Los jueces, deben cumplir sus funciones en forma imparcial, es decir, dejando de lado sus simpatías, pareceres e intereses propios, libre de toda influencia venga de donde venga, ya sean económicos, políticos o de otra índole. Se espera de un juez que tome su decisión en justicia en la solución de un caso concreto, aun cuando para ello tenga sacrificar sus propios intereses sub alternos y sentimientos, asumiendo en conciencia que de su deber de imparcialidad depende la restauración de la paz social, de ahí que este deber se yergue como una garantía de la confianza pública que el Estado y la sociedad en su conjunto deposita en manos de los jueces para dar solución a

sus conflictos, las mismas que versan desde las más domesticas hasta las más trascendentales del ser humano, como su vida, su libertad, su honor y su propiedad, por ello se dice que el principio de imparcialidad es la materialización de la justicia, el fin último de la función del magistrado.

Sería irreconciliable un juez que propendiera porque sus decisiones fueran imparciales, sin serlo él mismo en su estructura personal, sería violentarse a hacer lo que no es, sería un contrasentido, el juez no puede contentarse con ser un técnico de lo jurídico, es un profesional del derecho, es decir, se convierte en lo que hace y hace lo que es, por lo tanto la imparcialidad debe ser además de una garantía, una virtud visible y propia del juez en todos los actos de su vida, para ello el juez debe ajustar su pertenencia a una sociedad banal, egoísta y superficial, con su sentido natural o construido por lo que es bueno aportando así a la convivencia pacífica para todos.

Por su parte el Tribunal Constitucional peruano, ha señalado que el principio de imparcialidad posee dos dimensiones: a) Imparcialidad subjetiva, referida a evitar cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso y, b) Imparcialidad objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. Respecto de la dimensión objetiva de la imparcialidad judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que resultan siendo relevantes incluso las apariencias

(TEDH: caso Piersack, parr 30), por lo que pueden tomarse en cuenta, aparte de la conducta de los propios jueces, hechos que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad (TEDH, caso Pabla Ky v Finlandia parr 27). Sentencia N° 04675-2007-HC.

2.2.18. Análisis socio-jurídico en la legislación comparada.

COLOMBIA

Guardando similitudes con la constitución política peruana, la Constitución de 1991 en su artículo 159° considera que el Poder Judicial goza de plena autonomía e independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. En esta línea constitucional se puede señalar que la rama judicial integrada por sus diversos órganos jurisdiccionales y en particular por sus jueces en todas sus instancias tienen el poder-deber de solucionar los conflictos de intereses que se les presentan con plena autonomía sin injerencia de cualquier otro organismo o poder o del Estado y con total independencia funcional, esto es, sin sujeción a factores políticos, sociales, económicos, administrativos y otros de cualquier índole que atente y afecta un buen funcionamiento de la administración de justicia basado en el respeto del imperio de las leyes y los valores y principios recogidos en la Constitución como símbolo de la voluntad del pueblo soberano o del pacto social colombiano.

De la misma manera, el artículo 230 del CPC señala que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia (...) son criterios auxiliares de la actividad judicial”. Es decir, en el texto constitucional colombiano no se hace alusión a la institución jurídica del precedente, sino a la sujeción de la actividad o función jurisdiccional al imperio de la ley; reconociendo a la jurisprudencia la calidad de criterio auxiliar, dejando así de claro su pertenencia a la familia jurídica del civil law o romano-germánico donde la ley se afirma como fuente principal del Derecho más no así el dictado de los jueces que es propio del sistema anglosajón donde además la actividad judicial en la solución de conflictos se desarrolla siguiendo los precedentes establecidos y/o fijados por el juez en casos similares resueltos con anterioridad.

Colombia, tampoco es ajeno al uso de los precedentes, de ahí que reconociendo el valor de la jurisprudencia y su importancia en la actividad jurisdiccional parten por diferenciar la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, asumiendo que para el caso de la justicia ordinaria se requieren de tres sentencias uniformes con criterios reiterados para ser consideradas como precedente, mientras que en el caso de la Corte Constitucional una sola sentencia puede ser calificada como precedente.

Es decir, la formación de un precedente establecido por la Corte Constitucional colombiana no difiere de su homólogo establecido por el Tribunal Constitucional peruano, pero sí difiere en cuanto a los precedentes sentados por la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, donde para el caso peruano a diferencia de lo que ocurre en Colombia se requiere del desarrollo de Plenos Casatorios realizados por las Salas Supremas especializadas, de ahí que se tienen precedentes civiles, penales, laborales, etcétera.

Así, también en Colombia, se establece precedente cuando:

- Existan diferencias relevantes entre los casos.
- Cambio social.
- Cuando el Precedente es contrario a los valores, principios y derechos que lo fundamentan.
- Por cambios en el ordenamiento jurídico.

MEXICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara que México es un estado federal, conformado por estados libres y soberanos en todo lo relacionado con el régimen interno de cada uno de ellos, pero están unidos en una federación, es decir, se puede advertir que el poder se ejerce en dos niveles: el poder estadual y el poder federal; de ahí que en consonancia también la función jurisdiccional se ejerce en estos dos niveles, alcanzando las jurisprudencias dictadas a nivel federal a la categoría de Fuente de

Derecho. Así, la jurisprudencia se encumbra por mandato constitucional ya que según el párrafo décimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución”.

Así, la cultura jurídica mexicana nos ofrece un sistema de impartición de justicia donde los jueces en el ejercicio de sus actividades o funciones jurisdiccionales tienen un fuerte sometimiento a las decisiones de las instancias judiciales superiores, es decir, en el caso mexicano la jurisprudencia establecida por sus altas cortes federadas son de obligatorio cumplimiento por reconocimiento de la Constitución delegada en la ley; panorama que nos permite afirmar que cuentan con un sistema de justicia riguroso en el cumplimiento de precedentes, cuya fuerza y efectos vinculantes son ineludibles al momento de que se tenga que resolver casos futuros conforme a reglas o criterios jurídicos establecidos con anterioridad en casos similares o análogos.

Ahora, si bien es cierto que estas jurisprudencias establecidas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito, son de obligatoria aplicación a nivel nacional, es decir, existe obligatoriedad para su seguimiento por los órganos jurisdiccionales de

toda la nación mexicana, más aún cuando ellas se refieren o traten sobre la interpretación de la Constitución y normas generales.

Es más, los criterios sentados por los Tribunales del Poder Judicial a través de sus sentencias, en aras de la defensa del ordenamiento jurídico y su unitariedad también son vinculantes en el funcionamiento de la administración pública de los Estados Mexicanos, para de esta manera desincentivar litigios mediante procesos contenciosos-administrativos contra el Estado, ya que al ser observada obligatoriamente por toda autoridad pública, sea servidor o funcionario público, por existir certeza jurídica, no habrán cuestionamientos de los ciudadanos (administrados), quienes también están en la obligación de atenerse a las interpretaciones establecidas jurisprudencialmente con relación a la legalidad de la actuación de la administración pública.

En orden de lo que se viene tratando, se puede indicar que la jurisprudencia mexicana en los términos constitucionales y legales descritos, busca garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del derecho, en cuanto los ciudadanos puedan anticipar las consecuencias jurídicas de los problemas resueltos en la jurisdicción y en esa medida ajustar sus actuaciones; tiende a la igualdad formal al resolverse casos análogos de una manera similar y; promueve una política jurisdiccional de descongestión judicial en razón de que existiendo una forma previa de resolver un caso nuevo, se recurrirá a ella con los mismos argumentos y análisis.

VENEZUELA

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, confiere facultades a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para establecer interpretaciones de las normas y principios constitucionales con carácter vinculante tanto en sentido horizontal como vertical, es decir, con fuerza vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como para los demás órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía de todo el territorio nacional.

La constitución que recoge el pacto social venezolano reconoce al Poder Judicial para poder establecer precedentes en materia constitucional mediante la argumentación interpretativa que deberán realizar los jueces supremos de las normas constitucionales y de los valores y principios que ella inspira, otorgando de este modo integridad y unitariedad al ordenamiento jurídico.

Mediante el precedente se busca integrar el ordenamiento jurídico de cara a la seguridad jurídica que debe imperar en la vida social, caracterizando de esta manera a la justicia de previsibilidad e igualdad en la función jurisdiccional, cuya ausencia viene siendo cuestionado en estos últimos tiempos como nunca antes debido a la crisis política que viene atravesando Venezuela.

El artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que para asegurar la independencia del Poder Judicial sus órganos gozarán de autonomía funcional, económica y administrativa en los términos determinados por esta Ley y las demás leyes; agrega en su artículo tercero que en el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos, independientes, imparciales, responsables, inamovibles e intrasladables. En lo que nos ocupa, podemos ver en su ley orgánica que se hace énfasis en la independencia de la función jurisdiccional, principio que debe leerse y entenderse en el sentido de que los jueces a la hora que tengan que resolver un caso lo hagan solo sometidos al espíritu de las leyes y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin admitir injerencias o intromisiones de los otros poderes del Estado, ni presiones de otras autoridades públicas o políticas, ni de elementos económicos y/o sociales, preservando la garantía de su imparcialidad como consecuencia de su independencia.

Si bien es cierto que en tiempos actuales existen denuncias sobre la intromisión del poder político que afectan la independencia de los jueces, empero, su estudio superan los límites de la presente investigación que está enmarcada a la influencia de los precedentes en la independencia personal de los jueces y si su seguimiento más allá de pensar que invaden el criterio interpretativo del juez ayudan a lograr una función jurisdiccional basada en la predictibilidad de las

decisiones judiciales y con ello una sociedad más justa con seguridad jurídica, con equidad e igualdad.

2.2.1. BASES FILOSÓFICAS.

Como nos enseña Aristóteles el hombre es un ser social por naturaleza que necesita convivir con su congéneres de manera pacífica intercambiando actividades para su sostén y sobrevivencia; sin embargo, debido a la escases de recursos se presenta diversos conflictos de intereses que el Estado está llamado a dar solución reestableciendo la armonía y la paz social.

El profesor Guido Calabresi, señala que compete al sistema legal dar solución a los conflictos de intereses y, solo si logra este cometido puede ser aceptado como correcto; para ello el diseño de un sistema legal debe considerar un ordenamiento jurídico legítimo que inicie por una clara asignación de titularidades de derechos y sus respectivos alcances a ser observados y respetados por todos los miembros de una sociedad democrática, imponiendo reglas de prevalencia o preferencia de derechos subjetivos en caso de que estos sean afectados o violentados por terceros. Es decir, a prima facie se busca imponer la seguridad jurídica mediante el espontáneo respeto y observancia del ordenamiento jurídico y solo en caso de su incumplimiento será necesario recurrir a las normas de preferencia impuestas por el mismo Estado a través de un sistema de impartición de justicia encargado de dar efectividad al ordenamiento jurídico con la

solución de conflictos de intereses y la eliminación de incertidumbres, con la finalidad de lograr la paz social en justicia.

Para el profesor mexicano Eduardo García Máynez siempre el Derecho debe ser entendido además de su sentido ontológico (Teoría del Derecho) desde una perspectiva filosófica (Filosofía del Derecho). Fue en la antigua Grecia la cuna del desarrollo reflexivo sobre la filosofía del Derecho, llegándose a considerar a la justicia como una relación aritméticamente igual por correspondencia entre el hecho y el tratamiento de que este ha de ser objeto; empero, fue a partir del Derecho Romano que se dio el mayor interés en su reflexión desde la perspectiva jurídica.

La historia de la filosofía jurídica, también nos informa que los griegos se dieron cuenta que las grandes decisiones no podía dejarse en manos y al arbitrio de los poderosos encargados del gobierno; es así como los conflictos socio-políticos motivaron a Platón y a Aristóteles a realizar sus investigaciones sobre la argumentación racional que hoy en día sirva de base a la actividad que cumplen los jueces a la hora de resolver un litigio.

Juan Ornar Cofré (Profesor Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile) señala que “Específicamente en la esfera del derecho se habla de una lógica jurídica y de una argumentación jurídica con lo cual quizá se da a entender que existiría un modo sui

géneris de razonar y argumentar cuando los actuantes del derecho tratan de plantear sus problemas y, sobre todo, de dirimir en uno u otro sentido una controversia judicial”. De esta cita, se puede entender la trascendencia social y significado de las decisiones judiciales frente a las demandas de los particulares cuando se sienten perjudicados en la esfera de sus derechos y exigen se les reconozca o restituya sus libertades y posesiones mediante una decisión judicial construida sobre la lógica jurídica y la argumentación racional socialmente legítima.

2.2.2 Teoría científica que sustenta

En el modelo clásico, ideado por John Locke y Montesquieu, el Juez era un ser inanimado que solo repetía lo que decían las leyes dictados por el parlamento, no era más que la “boca de la ley”. Se dice que este modelo es propio del Estado Legal de Derecho, en el cual el legislador ostenta una posición predominante en la creación del Derecho y la racionalidad del sistema jurídico y, de esta manera concentraba el poder público.

Al establecerse el Estado de Derecho, se concibió el funcionamiento de la administración pública y dentro de ella la administración de justicia bajo el imperio riguroso de la ley, acaso como la fuente de Derecho más importante que la misma Constitución que como pacto social solo representaba un documento público que estatuyó la organización y funcionamiento del Estado y mera declaración derechos ciudadanos, máximo si los legisladores atendían los

intereses socio-económicos coyunturales sin que ello responda necesariamente a los valores y principios de la Constitución Política del Estado.

El Estado de Derecho moderno es concebida y vista como un Estado Constitucional, donde la Constitución pasa de ser considerada como una simple declaración pública a una verdadera norma jurídica con capacidad de controlar el poder público y privado, acogiendo la figura de un juez contralor del poder, garante de la vigencia de las leyes y de las libertades individuales conforme al espíritu de los principios y valores contenidos en la Constitución, la cual a su vez como Ley Fundamental se constituye como fuente principal en la producción del Derecho. Consiguientemente, las funciones jurisdiccionales de los jueces también asumen un papel importante en la producción de normas a través de la interpretación argumentativa de las leyes y la Constitución con relación de los casos concretos que tengan que resolver con independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Así, la independencia de los jueces exige de los jueces una labor interpretativa racional sobre las leyes desde la perspectiva constitucional, tanto más si como predica Ricardo Guastini vivimos la constitucionalización, por lo que en este sentido en las decisiones judiciales deberán prevalecer los derechos fundamentales y/o constitucionales contenidos en los principios y valores que el juez concretizará al impartir justicia, es decir, serán los jueces de un

Estado de Derecho Constitucional los que deberán de actuar con razonabilidad y legitimidad, teniendo como referente la Constitución.

2.2.3. Modelos.

El pensamiento de John Locke.

John Locke es considerado el padre del liberalismo; sus planteamientos se enfocan a partir de considerar al hombre en su estado de naturaleza, un mundo donde no está sometido a ninguna autoridad, donde es dueño y amo absoluto de su libertad, no vive en subordinación de otro y su obediencia está sujeta al poder de sí mismo, en otras palabras el hombre en su estado de naturaleza es un hombre libre.

Sin embargo, el hombre al lograr entender que ese estado de naturaleza es común a todos los hombres, por lo que ese estado pone en grave peligro tanto su libertad como sus posesiones (sus pertenencias) por falta de seguridad, ya que no existe una autoridad que detenta poder para controlar y poner límites a los comportamientos individuales, de modo que en aras de protección de su vida y su misma libertad renuncia a esa libertad que le ha conferido su estado de naturaleza para reconocer a un poder superior a ellos, al cual se someten para regular el ejercicio de la libertad individual.

Para Locke, el ser humano renuncia a ese estado de naturaleza, por las siguientes razones: A) Falta de una ley, conocida por todos, al cual se someten en aras de una convivencia pacífica. No es suficiente la ley natural, la cual puede ser dejada de lado cuando se trata de intereses particulares. B) Falta de un juez público e imparcial, que resuelva los conflictos derivados del incumplimiento de las leyes establecidas. C) Falta de un poder que de fuerza a las sentencias dictadas por los jueces, a efectos de que se ejecuten debidamente. Además, estas son las razones que llevan a los hombres renuncien a su propio imperio individual y prefieren entrar a vivir pacíficamente en sociedad, sometiéndose a la autoridad de un Estado, donde existirán normas preestablecidas que reglamenten el comportamiento humano, basado en el cumplimiento de un ordenamiento público-jurídico de observancia obligatoria, la cual les permitirá desarrollar sus relaciones interpersonales con seguridad, garantizando sus vidas, libertades y posesiones (lo que Locke denomina, propiedad). Así, cuando el ser humano entra en sociedad, abandona su absoluta libertad individual para ser reemplazado por las leyes que limitan su libertad, en aras de brindarle seguridad a él mismo como al grupo humano y renuncian por completo al poder de castigar y, mediante la entrega de una cuota de poder al Estado buscan lograr los objetivos comunes de bienestar común, como la seguridad y la prosperidad.

El Poder Legislativo.- El Poder legislativo se constituye en el primer poder del Estado, asumiendo el monopolio en el dictado de leyes

necesarias para el desenvolvimiento pacífico de sus miembros. Es la ley de ahora en adelante la que gobernarán la conducta humana, en libertad e igualdad de condiciones. Los parlamentos asumen el control de la voluntad soberana del pueblo por decisión democrática del pueblo, el pueblo le brinda poderes para que en su nombre establezcan un orden legal que les garantice el goce de sus libertades y derechos que le son connaturales a su condición de seres humanos y ciudadanos.

La función legislativa cobra relevancia política y social, ya no se estará sujeto a la voluntad discrecional de los gobernantes que en aras de una buena administración le dictaba su solo arbitrio y consciencia, sino ahora el poder de regulación de la vida social le está atribuida a los parlamentos basada en las reglas de la mayorías que mediante la ley otorgan reconocimiento o asignación de derechos subjetivos, delinean sus contenidos y alcances y definen sus prevalencia en caso de conflictos a través de un juez autorizado, tanto en sus esferas de nivel privado como público. Es decir, es la ley que ahora pone límites a la autodeterminación de los individuos en cuantos ciudadanos o sujetos de derechos y su relación con la administración pública o el ejecutivo.

El poder así concedido al legislativo, hoy en día debe ser ejercido con sujeción a un orden constitucional, esto es, las leyes deben ser dictadas para objetivar o concretizarlo los principios que como

mandato de optimización están contenidos en la Constitución, desterrando el abuso de su uso arbitrario que perjudiquen los intereses y derechos de los ciudadanos. Este inmenso poder siempre deberá propender en procurar el bienestar general o armonía social, atendiendo las demandas básicas como la salud, educación y justicia entre otras como justas y necesarias para una sociedad mejor.

Separación o distribución de poderes.- En el ancien régime vigente antes de la Revolución Francesa, el poder estaba concentrado en manos del Rey quien gozaba de facultades absolutas para establecer leyes, hacerlas cumplir y castigar su desobediencia, es decir, concentraba las facultades de lo que hoy conocemos como los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Así, se afirma que la división de poderes es un principio político de los modernos Estados democráticos, donde el poder es ejercido por entidades y órganos distintos, autónomos e independientes entre sí.

Rápidamente y con mucha cautela se entendió que este poder de dictar leyes no era compatible con el poder de hacerlas cumplir por sí mismas, sino que era necesario que sean otros hombres distintos a las que dictaban, los encargados de ejecutarlas, conjurando o evitando de esta manera el conflicto de interés en que podían involucrarse al tener que cumplir las leyes que ellos mismos dictaban; es por esta razón impostergable, que se da nacimiento al Poder Ejecutivo concebida como un poder separado del Poder Legislativo,

como la encargada para hacer cumplir o ejecutar las leyes por el segundo de los nombrados.

De la misma forma señala John Locke en su Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil, la existencia de otro poder denominado Poder Federativo, encargado de la seguridad y de las relaciones exteriores, encargado también con respecto a los beneficios o daños que la comunidad pueda recibir desde afuera; sobre este poder recae la responsabilidad de hacer la guerra y firmar los tratados de paz, porque ostenta la fuerza de la sociedad (fuerza pública).

Cabe precisar que estos poderes no están totalmente separados, sino se encuentran conectados y subordinados mediante los llamados controles y equilibrios o sobrepesos que impiden que cualquiera de ellos sea preponderante, asumiendo lo que en realidad existe es una distribución del ejercicio del poder del que está investido el Estado.

Pensamiento del barón de Montesquieu.

Para Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu «De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor.». De esta manera Montesquieu ratifica su idea de que en cada Estado

democrático existen tres clases de poderes, las que ejercen la potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la potestad judicial.

Montesquieu sentía gran admiración por la monarquía constitucional británica y en su libro *El Espíritu de las Leyes* desarrolló las ideas sobre la división de poderes planteado por John Locke, a tal grado que a él se le atribuye ser el máximo referente de la teoría de la división separación de poderes del Estado, desarrollada sobre las bases del constitucionalismo inglés donde existen sistemas de frenos, contrapesos y controles entre el poder legislativo con la sanción real de la ley, el ejecutivo al gobierno, y el judicial a los tribunales de justicia.

Asimismo, considerando la importancia de las leyes, señala que estas corresponden a cada forma de gobierno, teniendo en cuenta el espacio y tiempo de cada Estado. Su ideal político de rechazo a los gobiernos absolutistas y despóticos reposa en la defensa de la libertad junto al necesario orden impuesto por la autoridad política.

En cuanto a las forma de gobierno, indica que existen tres formas de gobierno distintos: el republicano, el monárquico y el despótico, destacando que cuando el pueblo entero es dueño del poder soberano estamos ante una democracia de in gobierno republicano, cuando está en manos de unos cuantos se trata de una aristocracia y es un Estado despótico cuando el poder se concentra en una sola

persona, es decir mediante un poder absoluto asume potestades legislativas, ejecutivas y judiciales.

Es interesante cuando Montesquieu define el "poder" a la vez como función y como órgano, de ahí que al igual que Locke defiende que la función legislativa debe ser ejercida por el Poder Legislativo, las funciones ejecutivas y federativas por el Poder Ejecutivo y las funciones judiciales como potestad exclusiva del Poder Judicial con sumisión a la ley.

Importancia de la función jurisdiccional en el common law.

Una de las familias jurídicas importantes en el mundo es el Common Law vigente en los países de tradición anglosajona donde la producción del Derecho es desarrollada por los jueces mediante la jurisprudencia en consideración de las costumbres socialmente practicadas; constituyendo de esta forma la jurisprudencia fuente principal del Derecho, distinto al Civil Law que tiene como fuente principal la ley.

Empero, además del Judicial Precedent o Case Law, que es similar a lo que en el civil law se denomina jurisprudencia, también son fuentes formales del Common law:; the Legislation o Statutory Law, es decir la leyes parlamentarias (Act of Parliament) y disposiciones de tipo reglamentario y la legislación delegada (Delegated legislation) aprobados por el gobierno central o local, como las

órdenes ministeriales (ministerial orders) y las ordenanzas municipales (local by-laws); the Custom, la costumbre, como los usos mercantiles (law merchant) y; the Books of authority: la doctrina.

La función jurisdiccional en esta familia jurídica se caracteriza por el poder discrecional de sus jueces, quiénes gozan de una posición gravitante dentro del sistema político democrático, en ellos reposa la confianza ciudadana para ejercer control del poder, ostentado poderes para controlar la constitucionalidad de las leyes y de todo acto de poder sea público o privado.

Para Alexis de Tocqueville la función judicial es indispensable cuando existe un litigio a la que sirve de árbitro; se caracteriza por el pronunciamiento de los jueces mediante el establecimiento de normas o reglas extraídas del caso concreto que resuelve, siendo importante destacar que la función jurisdiccional no tienen acción por lo que de ser necesario deberá promoverse a instancia de parte interesada que somete a su conocimiento y resolución de un conflicto de intereses.

La función jurisdiccional en la familia jurídica del Common law, gira alrededor de la primacía de la Constitución, cuya observancia como norma jurídica de aplicación directa requiere que sea recreada por la actividad interpretativa de los jueces, quiénes en la solución de los casos concretos recurren a los precedentes establecido con

anterioridad en casos análogos, demostrando previsibilidad e igualdad en la actuación judicial.

En el Common law, al ser la Constitución eje de toda actuación pública y privada, reconoce a la función jurisdiccional ejercida por los jueces el poder de no aplicar las leyes o reglamentos que sean encontrados o incompatibles con la Constitución ya sea en su forma o fondo. Se exige de los jueces un activismo para controlar que toda actuación de la administración y/o la función pública esté conforme a los parámetros jurídicos-morales que la Constitución reconoce como valiosas para la vida en sociedad.

Un claro ejemplo que caracteriza de constitucional la función jurisdiccional, se puede ver a través de la judicial review que a partir de casos concretos permite a la Suprema Corte de los Estados Unidos de América a no ordenar el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso o de cualquier acto que sea contrario a la Constitución. Un caso concreto de gran relevancia política se presenta en el conocido caso Marbury contra Madison resuelto por el Juez John Marshall, cuya solución se limitó en que no era constitucional que la Corte otorgase el nombramiento como juez de paz a Marbury.

La labor interpretativa del juez.

Las normas jurídicas nacen para la regulación de las relaciones humanas intersubjetivas en una determinada estructura social y

política; de este modo, la vida de tales normas se justifica en su aplicación cotidiana y, en este sentido, se ha de advertir que toda aplicación normativa implica una operación interpretativa de sus propios términos, alcance, contenido y finalidad.

La interpretación es el medio a través del cual el Derecho hace posible su aplicación a la solución de los conflictos que está llamado a solucionar. De ahí que, como dice Raz (RAZ, J., “Por qué interpretar?” en Isonomía N°5, 1996, p.25., “en ocasiones ni siquiera nos planteamos el porqué de tal operación en este campo”.

Conviene, entonces, preguntarnos ¿Qué entiende la teoría del derecho por interpretación jurídica?. Wroblewski (Véase Wroblewski, J., Sentido y hecho en el Derecho, Universidad del País Vasco, San Sebastián 1990, pp. 129, 130 y 157) distingue dos sentidos de la interpretación jurídica, el amplio y el estricto. En el primero de ellos, interpretar consiste en asignar significado a expresiones del lenguaje jurídico, y así la tarea del intérprete es la de establecer que es lo que dice una expresión jurídica cualquiera. En el segundo, interpretar consiste en determinar el sentido de una expresión jurídica dudosa, y así la tarea del intérprete consiste en aclarar lo que dice dicha expresión o escoger entre significados enfrentados.

En términos similares, Ricardo Guastini (Estudios Sobre la Interpretación Jurídica, 1ª edición, UNAM, México, 1999, pp. 3-4)

enseña que “en sentido estricto, “interpretación” se emplea para referirse a la atribución de significado a una formulación normativa en presencia de dudas o controversias en torno a su campo de aplicación: un texto dice, requiere de interpretación (sólo) cuando su significado es oscuro o discutible, cuando se duda sobre si es aplicable o no a un determinado supuesto de hecho.” Por otra parte, en sentido amplio, “interpretación” se emplea para referirse a cualquier atribución de significados a una formulación normativa, independientemente de dudas o controversias. Es decir, por un lado, interpretación significa decisión en torno al significado no de un texto cualquiera en cualquier circunstancia, sino (sólo) de un texto oscuro en una situación dudosa; mientras que por el otro interpretación denotara la actividad de atribuir un significado a un texto, sin importar si este es dudoso, la interpretación no sólo sería necesario en los casos difíciles sino en presencia de cualquier caso, toda vez que la interpretación es el presupuesto necesario para la aplicación de una disposición normativa.

Con la locución *Interpretación jurídica* se entiende, comúnmente, cualquier actividad cognoscitiva destinada a la comprensión del significado de un acto jurídicamente relevante en la vida social (Véase FERRAJOLI, L.: “Interpretazione dottrinale e interpretazione operativa”, en *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* vol.XLIII, 1966, p.290). Así, “el término interpretar se puede aplicar, aunque con distintos matices, a objetos diferentes (GASCÓN ABELLÁN, Marina,

GARCÍA FIGUEROA, Alfonso; “La argumentación en el derecho”, 2ª edición, Palestra Editores, Lima, 2005, p.105). Pues, se puede interpretar un comportamiento humano, un acontecimiento histórico o social, un texto, etc.

Cuando de la interpretación jurídica se trata, el objeto de interpretación será un texto o documento jurídico, pues, el derecho se expresa a través del lenguaje. De allí que, la interpretación jurídica es una interpretación de enunciados, y como interpretar un enunciado consiste en atribuirle sentido o significado, la interpretación jurídica consiste en la atribución de sentido o significado a los enunciados jurídicos (GASCÓN ABELLÁN, Marina, GARCÍA FIGUEROA, Alfonso; “La argumentación en el derecho”, 2ª edición, Palestra Editores, Lima, 2005, p.105).

Como resalta Rafael de Asís (Jueces y Normas: la decisión judicial desde el ordenamiento”, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 182), una de las notas específicas de la interpretación jurídica “guarda relación con la propia actividad interpretativa, en el sentido de que en ella se da entrada a la valoración”. Es decir, “a pesar de que puedan ser descritos criterios y mecanismos jurídicos interpretativos, a la hora de interpretar aparecen también las valoraciones del intérprete, que tiene que elegir entre posibles significados, y está condicionado por el momento jurídico.” Consideramos que la interpretación es una actividad presente frente a cualquier acto de aplicación del Derecho.

En otras palabras, la interpretación no precisa de una disposición normativa dudosa y/o oscura, sino que aun cuando la disposición no presenta dichas connotaciones, siempre será necesaria la actividad interpretativa del operador jurídico.

De otro lado, la labor interpretativa da cabida a cierta subjetividad en el intérprete, quien puede efectuar valoraciones, por ello, es que se exige en el juez la justificación de la premisa mayor. Es decir, el juez tiene el deber de justificar la aplicación de la norma al caso concreto.

2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES

El precedente Constitucional.

Es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga.

El precedente Judicial

Se encuentra estrechamente ligada a la estructura jerárquica del sistema judicial, de manera tal que los efectos vinculantes del precedente es entendido sentido vertical; esto se aplica desde la Corte Suprema hacia las Cortes y Juzgados inferiores de todo el sistema judicial.

Democracia y Poder Judicial

Consiste en asegurar una administración de justicia independiente de quienes dictan las normas generales que regulan el uso de la coacción. De esta manera, cuando la independencia es efectiva los jueces comparten una cuota de poder apreciable. Por ello, cuando el magistrado determina la verdad y procura alcanzar el objetivo final de justicia en forma imparcial e independiente.

Independencia judicial

El principio de independencia se traduce fundamentalmente en un deber de independencia de todos y cada uno de los jueces cuando realizan actos jurisdiccionales; de ahí que, los destinatarios beneficiarios del principio jurídico de independencia de los Jueces no son los jueces mismos, sino los ciudadanos y los justiciables.

Independencia e imparcialidad

La independencia y la imparcialidad responden al mismo tipo de exigencias, pues buscan garantizar a los ciudadanos su derecho a ser juzgados desde el Derecho, preservando al mismo tiempo la credibilidad de las decisiones y las razones jurídicas. El principio de independencia tiene como finalidad el control de los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes desde fuera del proceso jurisdiccional, es decir, provenientes del sistema social en general.

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS

Hipótesis general.

HG.1: Si la independencia personal del Juez influye favorablemente como acto funcional entonces mejorara la seguridad jurídica en la administración de justicia del Perú, con el cumplimiento obligatorio de los precedentes vinculantes.

Hipótesis Específicos

HE.1: La imposición de los precedentes no influye negativamente en la independencia del juez, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

HE.2: Si se respeta la independencia del Juez proclamada en la Constitución y otras leyes entonces la Administración de justicia sería eficaz en la resolución de conflicto de intereses y se garantizaría la seguridad jurídica.

HE.3: Si se hace uso adecuado de la competencia dada por Ley al juzgador sobre su autoridad en la decisión entonces los asuntos puestos de su conocimiento no afectarían el principio de legalidad y el debido proceso.

2.5. SISTEMA DE VARIABLES

2.6.1. Variable independiente

Independencia personal del juez

2.6.2. Variable dependiente

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

| VARIABLES | INDICADORES |
|---|--|
| <p>VARIABLE INDEPENDIENTE</p> <p>Independencia personal del juez</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Honestidad. • Alta responsabilidad funcional y social, • Especialización y Expertos. • Idoneidad. • Indemnización solidaria en partes iguales |
| <p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>Sistema de justicia peruano</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Regulación y modificación de normas • Modificación de la legislación. . • Doctrina de la responsabilidad funcional • Para promover la paz social en justicia. • El fomento a la inversión privada. • La estabilidad democrática. • Fomento al desarrollo |

CAPÍTULO III

III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. Enfoque

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo, porque me ha permitido dar uno de los pasos más importantes y decisivos de la investigación en la elección del método o camino que me llevo a obtener de la investigación resultados válidos que respondieron a los objetivos inicialmente planteados. De esta decisión dependió la forma de trabajo, la adquisición de la información, los análisis que se practicaron y por consiguiente el tipo de resultados que se obtuvieron; la selección del proceso de investigación guía de todo el proceso investigativo y con base en él se logró el objetivo de toda la investigación.

3.1.2. Nivel de investigación

Se utilizó el nivel DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO, por cuanto que la investigación de nivel descriptivo, consistió, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado. Y del mismo modo el nivel explicativo ha tratado de efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos.

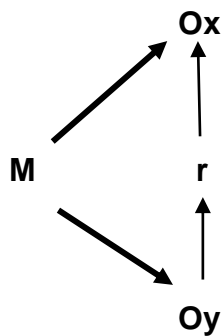
(Palacios, J, Romero y Ñaupas, H. (2016). Pag.405).

3.1.3. Diseño de investigación

El diseño que se utilizó es NO EXPERIMENTAL siendo su enfoque cuantitativo, observándose los cambios que se dan en su contexto a partir de información. (Palacios, J, Romero y Ñaupas, H. (2016). Pag.404)

Esquema de investigación

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama:



M = muestra
Ox, Oy = observación de variables
r = relación

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

a) Población

Estuvo conformada por 150 Abogados entre litigantes y jueces del Distrito Judicial de Huánuco.

b) Muestra

Estuvo determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO de manera empírica o azar por un total de 30 Abogados entre litigantes y jueces (20%).

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas

- **Fichaje**

Nos permitió la abstracción de información teórica legal y jurisprudencial de expedientes judiciales (sentencias), libros, revistas, fuentes de internet respecto al tema investigado.

- **Encuesta**

A través de la encuesta se obtuvo la información de operadores en la materia.

- **Entrevista**

Estuvo dirigida a Abogados entre litigantes y jueces del Distrito Judicial de Huánuco, a fin de recolectar la información para dar consistencia, confiabilidad y objetividad al presente trabajo de investigación.

- **Técnicas estadísticas**

Nos permitió la representación estadística de los resultados obtenidos de la información procesada, su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos así como el análisis.

Instrumentos

Son los recursos auxiliares que nos sirvieron para recolectar los datos de las fuentes, con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y

que nos permitió obtener la información para la realización de nuestra investigación.

- **Cuestionario**

Este instrumento nos permitió aplicar una encuesta de opinión mediante el listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a los Abogados litigantes y jueces.

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACIÓN

Los resultados se presentan en tablas y gráficos, analizados con la aplicación de la estadística descriptiva, seguidamente se procedieron a analizarlos e interpretarlos.

Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Ms Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación.

CAPITULO IV

IV RESULTADOS

4.1. RELATO Y DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD OBSERVADA

Año tras año las estadísticas judiciales dan cuenta cada vez más la acreciente carga procesal en el Poder Judicial, proponiendo como remedio repetido el aumento de presupuesto para la creación de más juzgados, como si esta sería la única alternativa de solución al problema que quizás constituye también uno de los insumos para actos de conductas disfuncionales o corrupción y cuándo no, nos hacen recitar “justicia que tarda no es justicia”. En la actualidad la realidad nos da respuesta en el sentido de que no han sido suficientes la aprobación de nuevas leyes, nuevos códigos y otras acciones tendientes a mejorar la función jurisdiccional reflejada en la percepción de la desconfianza ciudadana. Una de las propuestas, para palear en alguna medida esta problemática y también propuesta por la CERIAJUS que duda cabe está constituida por el establecimiento de criterios jurisdiccionales ya sean como jurisprudencias o precedentes y su respeto en su observancia y/o seguimiento en clara muestra de dar respuestas o soluciones uniformes y sobre todo predecibles frente a conflictos similares, dando de esta manera seguridad jurídica y evitando el comportamiento litigioso, ya que de saber anticipadamente como se resolverá su caso, el

particular estará incentivado para no buscar un proceso largo y sin esperanza para sus expectativas.

Entonces, se puede comprender la valiosidad de un sistema de precedentes que sirvan de línea en la función jurisdiccional, establecidos como fuente de integración del Derecho Positivo de un Estado, dado que el ordenamiento jurídico ya sea por ambigüedad o vagancia o por lagunas siempre requerirá sean llenadas en su contenido por la labor interpretativa y argumentativa de los Jueces. Obviamente, sentar estos precedentes o líneas jurisprudenciales deben y tienen que ser facultados a los altos tribunales, de modo que pueda irradiar en su observancia y aplicación en el sistema de justicia.

Podemos asumir, que uno de los más grandes males que aqueja la administración de justicia en el país, es sin lugar a dudar la falta de seguridad y predictibilidad, empero el remedio que todos queremos encontrar no puede trastocar la institucionalidad democrática, ni puede implicar injerencias en las funciones de los poderes del Estado. Por lo tanto, es imperiosa la necesidad de compatibilizar la existencia de los precedentes con el ejercicio mismo de la función jurisdiccional con independencia.

Ahora, sobre la problemática que engloba la existencia de los precedentes vinculantes y su injerencia en la independencia del juez se ha formado dos posturas claramente definidas, una de ellas encaminada a justificar su existencia y la configuración que se ha ofrecido de ellos, mientras que la otra postula un rechazo a la delimitación efectuada por los altos tribunales de

justicia y que ven en los precedentes así entendidos un peligro para la independencia personal del juez.

La profesora Eugenia Ariano Deho ha señalado que le parece realmente intolerable pensar que en nuestro sistema jurídico sea constitucionalmente legítimo la imposición al Juez de los precedentes vinculantes, ya que esos supuestos precedentes vinculantes, constituyen más bien ilegítimas imposiciones verticales (o sea autoritarias) que atentan contra la independencia judicial. En esta línea el profesor Monroy Gálvez, también acotó que el precedente vinculante u obligatorio en los términos de un mandato inexorable que debe ser seguido ‘sin dudas ni murmuraciones’ o que puede dar lugar a la anulación de las decisiones que la desconocieron, no existe en ningún lugar del mundo”.

Desde otra posición, Aníbal Torres refiere que los Jueces de todas las instancias judiciales no pueden desvincularse de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, enfatizando bajo responsabilidad, por cuanto, están en la obligación de administrar justicia con sujeción a la Constitución y a las leyes.

En este contexto, nuestra investigación a diferencia de las posturas esbozadas no está orientada al estudio en sí de los precedentes desde la óptica de la teoría general del derecho, sino abordarla desde una óptica de política jurisdiccional, pues, nuestro cometido está orientado a encontrar los límites normativos que permitan compatibilizar la existencia del precedente con la independencia personal del juez en el ejercicio de su funciones al

resolver un caso concreto. Esto es, si al cumplir cerradamente un criterio jurisprudencial sin oportunidad de apartarse, el juez ve afectado su independencia y en términos “montesquinos” lo convierte en boca del precedente.

Nosotros asumimos, que el seguimiento y observancia obligatoria de los precedentes no afecta la independencia personal de los jueces, sino que es deber de todo juez velar por la seguridad jurídica que debe otorgar la función jurisdiccional como pilar de la democracia. Esta seguridad jurídica se debe asentar y acentuar en la previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales mediante soluciones y respuestas uniformes a casos concretos similares, máxime por el carácter inherente de autoridad racional reconocida al precedente y su efecto integrador normativo en supuestos de vacío normativo.

Más allá de que el Código Procesal Constitucional, tiene establecido que los jueces ordinarios deben aplicar la ley conforme a las interpretaciones efectuadas por el Tribunal Constitucional, compartimos con éste cuando ha señalado que los jueces ordinarios no pueden recurrir a la autonomía (artículo 138° de la Constitución) y a la independencia (artículo 139°, inciso 2) que la Constitución les reconoce para desenlazar de ella. Porque si bien es verdad que la Constitución reconoce al Poder Judicial autonomía e independencia, esto no significa que le haya conferido condición de autarquía. Y es que, en un Estado Constitucional Democrático, los poderes constituidos no están por encima de la Constitución, sino que están

sometidos a ella. En este mismo orden, debe entenderse respecto a los precedentes judiciales emanados por las Salas de la Corte Suprema de Justicia, cuyo cumplimiento en sentido vertical y horizontal debe ser respetado en el fuero judicial.

De ahí que admitir que el Poder Judicial pueda aducir autonomía e independencia para justificar su desvinculación de las sentencias del Tribunal Constitucional, en realidad con ello no sólo se está poniendo en cuestión tales ejecutorias, sino que también se está desligando de la Constitución misma, al ser aquellas, finalmente, una concreción de ésta, tanto más si la independencia se encuentra sujeta a límites por lo que no hay justificación para que sea interpretada en términos absolutos.

Está fuera de duda que el Poder Judicial es el órgano estatal que tiene como principales funciones resolver los conflictos, ser el primer garante de los derechos fundamentales (...) canalizando las demandas sociales de justicia y evitando que éstas se ejerzan fuera del marco legal vigente. De modo que al seguirse estrictamente los criterios establecidos con autoridad de precedentes se otorgan predictibilidad y sin lugar a dudas se crea un espacio de incentivos para disminuir la litigiosidad. Claro está, sin que ello signifique una imposición absoluta frente a razones objetivas y de mayor justicia en el caso concreto, es decir, el criterio sentado como precedente debe ser seguido por los jueces ordinarios en casos similares o de naturaleza homóloga, sin descartar su apartamiento siempre y cuando ofrezcan

soluciones razonablemente más legítimas y justas o en todo caso ofrecer una motivación que habilite la facultad del distinguishing o caso distinto.

De continuar el estado de cosas, lo único que queda es ver cómo el sistema de justicia se seguirá deteriorando. De ahí la importancia de un informe de la justicia que permita identificar las fallas del sistema y formular recomendaciones específicas para mejorarla. Los datos que hoy ponemos a la luz solo son un primer paso y en modo alguno son suficientes. Por ello, nos comprometemos a enriquecer este informe con más datos e indicadores que abarquen todo el sistema de justicia a partir de la observancia de los precedentes y que se presente todos los años.

4.2. CONJUNTO DE ARGUMENTOS ORGANIZADOS

Debido al incesante y decidido avance del conocimiento reflejada en la dependencia cada vez más acentuada de estos en los campos del quehacer y saber humano, que involucra innovaciones de las diversas actividades del hombre dentro de ellas, en la forma de analizar e interpretar las normas para resolver los conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la ciencias sociales, donde se incluye el derecho, “descansa en el postulado de que la sociedad se transforma y que esa transformación puede ser orientada a través de los principios generales del derecho que inspiran a la sociedad peruana.

La presente investigación, será viable, porque no se presentará impedimento alguno en la institución a la que se acudirá para desarrollar, ya que el investigador tiene acceso al Poder Judicial por formar parte de ello.

Asimismo, se encontrará información bibliográfica, revistas especializadas y páginas de internet actualizadas sobre el tema.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES.

CUADRO Nº 1

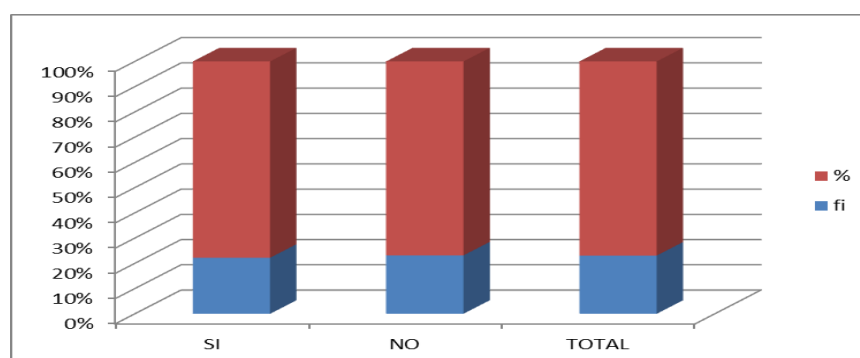
¿Considera Ud. que los jueces ejercen con plena independencia personal sus funciones jurisdiccionales?

| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 2 | 7 |
| NO | 28 | 93 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO Nº 1

El Poder Judicial goza de plena autonomía política, administrativa, económica y disciplinaria.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO Nº 1

A la pregunta ¿Considera Ud. que los jueces ejercen con plena independencia personal sus funciones jurisdiccionales?

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 93% de los encuestados opinan que no, por cuanto, son meros aplicadores de lo normado en las leyes y los reglamentos, dejando de lado sus facultades implícitamente reconocidos por la Constitución Política del Estado y que los criterios establecidos en los precedentes son inmodificables y que por temor de ser sujeto a medidas disciplinarias prefieren no apartarse en ningún caso y por ningún motivo de las interpretaciones realizadas por los altos tribunales de justicia del país, ya sea el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia.

CUADRO Nº 2

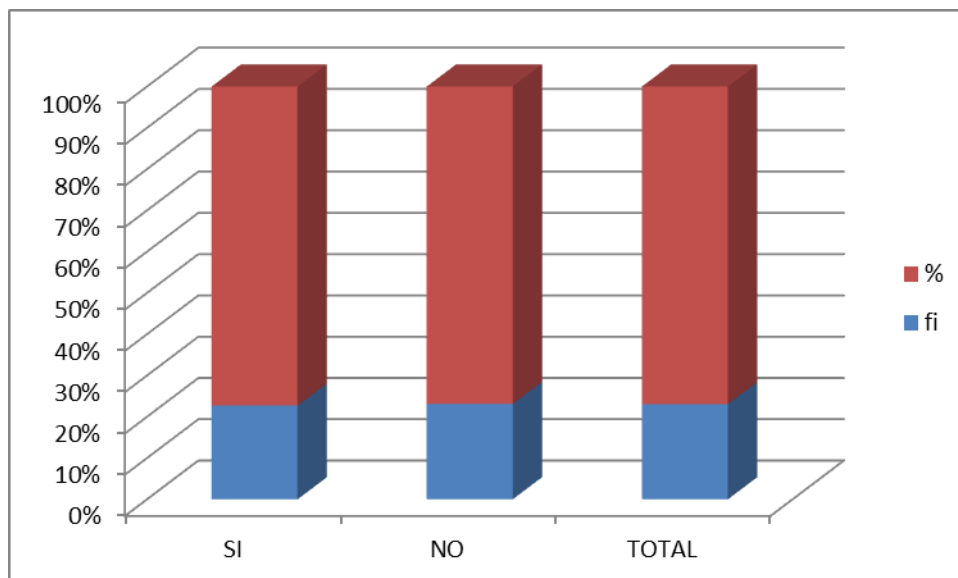
¿Considera Ud. que el Estado garantiza la independencia personal del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional?

| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 5 | 17 |
| NO | 25 | 83 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO Nº 2

El Estado garantiza la independencia personal del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO Nº 2

A la pregunta ¿Considera Ud. que el Estado garantiza la independencia personal del juez en el ejercicio de su función jurisdiccional?, De acuerdo a

los resultados obtenidos el 83% de los encuestados opinan que existe injerencia del poder ejecutivo que, a través de “lobbys” políticos o económicos, compra las conciencias de los magistrados e influye en el nombramiento de los principales cabezas del Poder Judicial con la finalidad de manejarlo de acuerdo a sus intereses partidarios.

CUADRO Nº 3

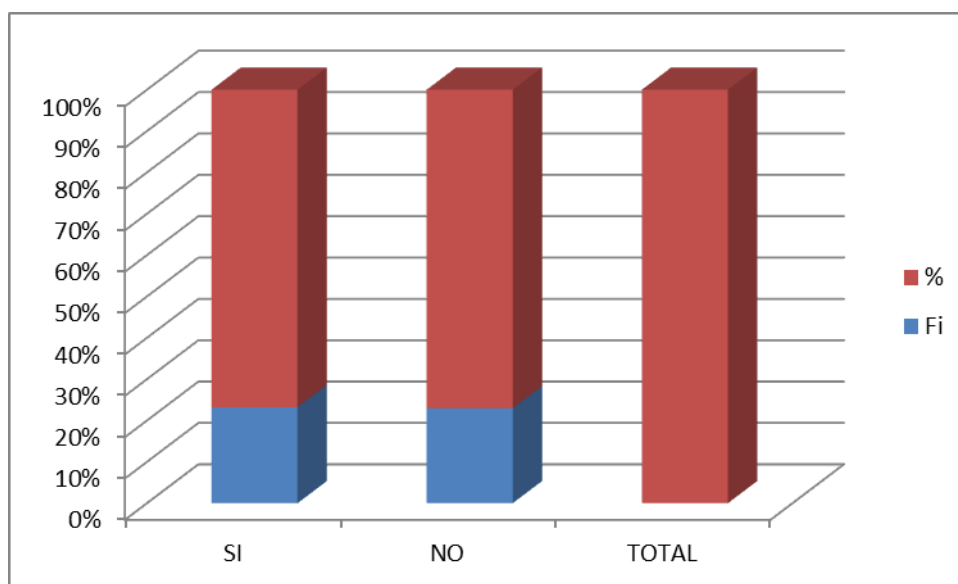
¿Considera Ud. que existe un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho?

| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 10 | 33 |
| NO | 20 | 67 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO Nº 3

Existe un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO Nº 3

A la pregunta: ¿Considera Ud. que existe un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho? El 67% respondió que no considera un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho a la autonomía a la

independencia personal del juez dentro del Poder Judicial donde constituye uno de los requisitos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.

CUADRO N° 4

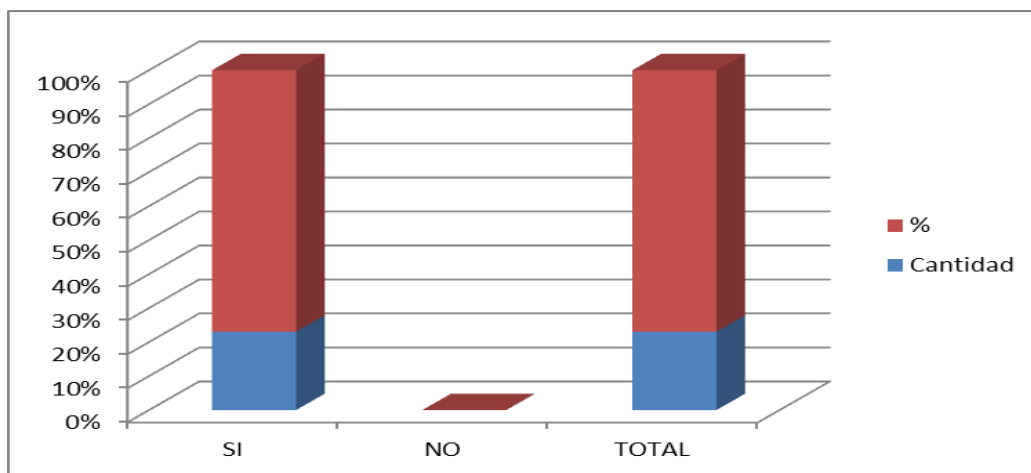
¿Considera Ud. que los precedentes vinculantes son obligatorios, por lo que su apartamiento, constituye responsabilidad funcional de los jueces?

| ITEMS | Cantidad | % |
|-------|----------|-----|
| SI | 30 | 100 |
| NO | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO N° 4

La responsabilidad funcional de los jueces por apartarse de un precedente jurisdiccional.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO N° 4

A la pregunta: ¿Considera Ud. que los precedentes vinculantes son obligatorios, por lo que su apartamiento, constituye responsabilidad funcional de los jueces? La respuesta fue contundente, el 100 % opinaron en sentido afirmativo, señalando que su cumplimiento es

obligatorio, por lo que en caso de incumplimiento genera responsabilidad funcional basado en que dicho comportamiento denota falta de probidad por lo que son pasibles de sanción disciplinaria en la forma y modo que la ley señala.

CUADRO Nº 5

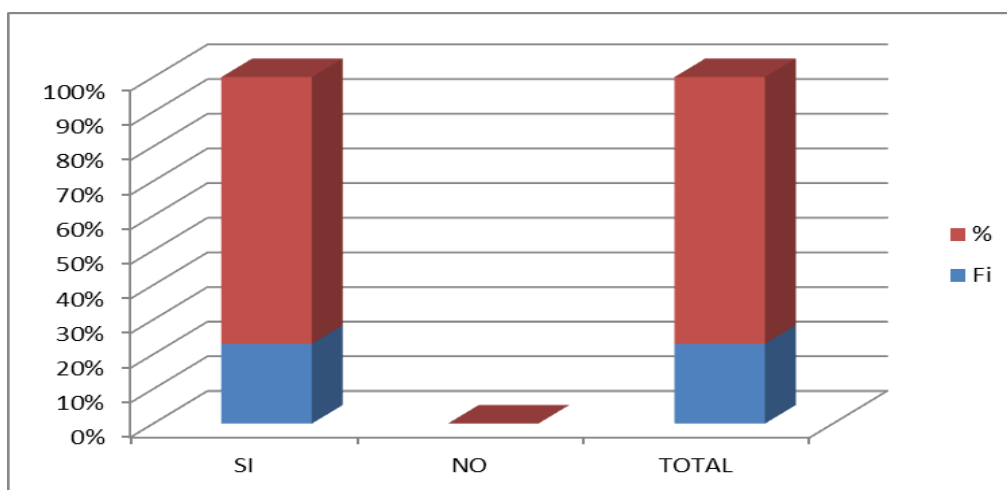
¿Considera Ud. que en ciertos casos el magistrado al expedir sentencia, se aparta de sus criterios y principios debido a la presión política de los grupos de poder?

| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 30 | 100 |
| NO | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO Nº 5

En ciertos casos el magistrado al expedir sentencia, se aparta de sus criterios y principios debido a la presión política de los grupos de poder.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO Nº 5

A la interrogante: ¿Considera Ud. que en ciertos casos el magistrado al expedir sentencia, se aparta de sus criterios y principios debido a la presión política de los grupos de poder? Un 100 % respondió que sí se aparta de sus criterios y principios debido a la presión política de los grupos de poder y por mantener su cargo emiten las sentencias a la presión política de los grupos del poder.

CUADRO N° 6

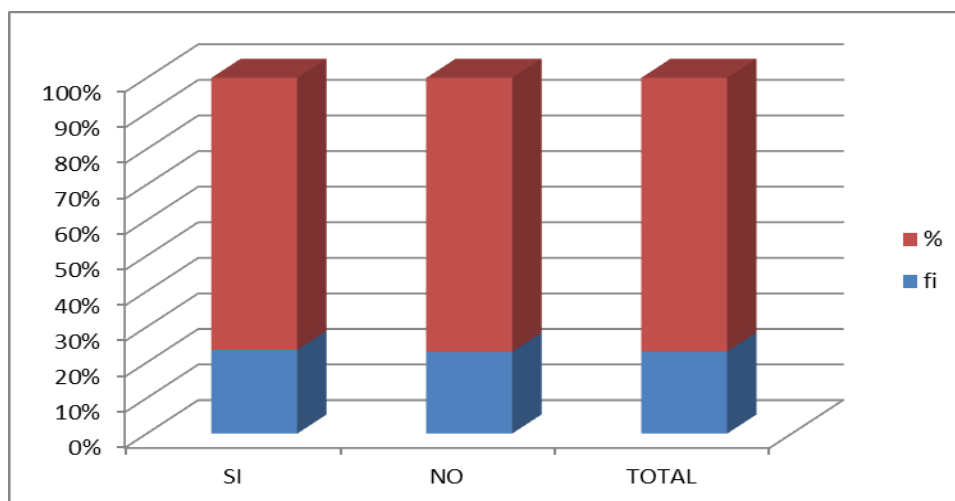
¿Considera Ud. que los jueces tienen responsabilidad política a consecuencia del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales?

| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 4 | 13 |
| NO | 26 | 87 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO N° 6

Tienen responsabilidad política los jueces.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO N° 6

A la pregunta: ¿Considera Ud. que los Jueces tienen responsabilidad política a consecuencia del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales? La respuesta dio que un 87% de los encuestados, manifestaron que no existe responsabilidad política de los jueces, limitándose en realidad solo a una responsabilidad disciplinaria en el ámbito administrativo y penal como

consecuencia de una conducta disfuncional previamente establecida como falta a sus deberes funcionales en el ejercicio de la función jurisdiccional.

CUADRO Nº 7

¿Cree Ud. Que se debe buscar fortalecer la independencia personal de los magistrados en el rol que debe desempeñar dentro de un Estado social y democrático de Derecho?

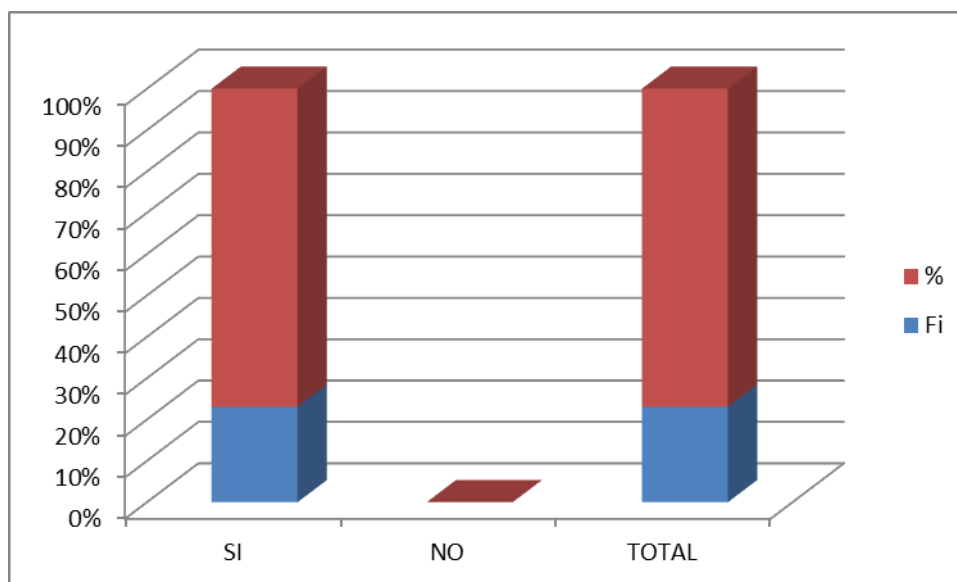
| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 30 | 100 |
| NO | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados

Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO Nº 7

Se debe buscar fortalecer la independencia personal de los magistrados en el rol que debe desempeñar dentro de un Estado social y democrático de Derecho.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO Nº 7

A la pregunta: ¿Cree Ud. Que se debe buscar fortalecer la independencia personal de los magistrados en el rol que debe desempeñar dentro de un Estado social y democrático de Derecho? De la respuesta se puede advertir que el 100% de los encuestados manifestaron que se busca fortalecer la independencia personal de los magistrados en el rol que se debe desempeñar dentro de un Estado social y democrático de Derecho.

CUADRO N° 8

¿Tiene conocimiento de la existencia de Precedentes emitidos por la Corte Suprema de Justicia vinculados con el rol de la independencia de los magistrados en un Estado Social y Democrático de Derecho?

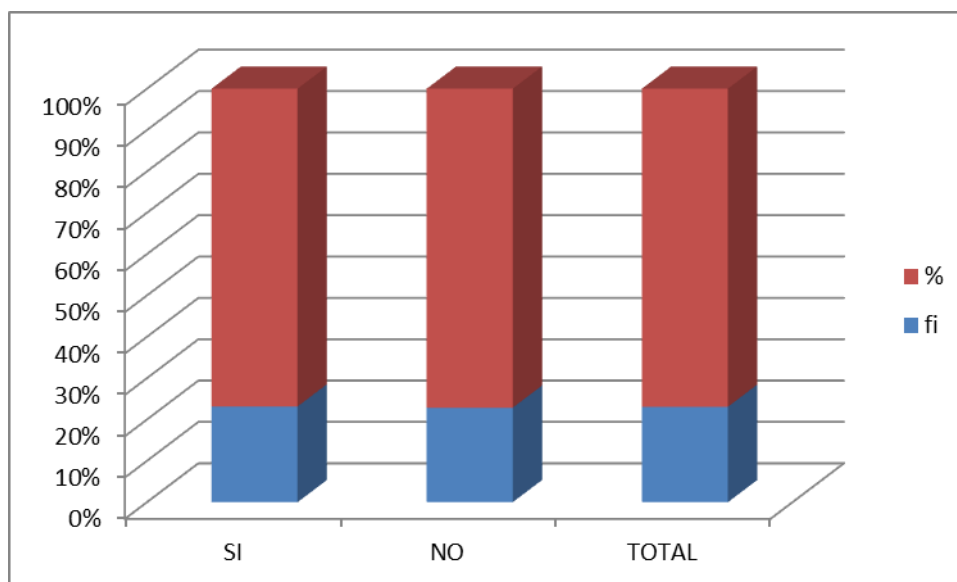
| ITEMS | Fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 22 | 73 |
| NO | 8 | 27 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados

Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO N° 8

Tiene conocimiento de la existencia de Precedentes emitidos por la Corte Suprema de Justicia vinculados con el rol de la independencia de los magistrados en un Estado Social y Democrático de Derecho.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO N° 8

A la pregunta: ¿Tiene conocimiento de la existencia de Precedentes emitidos por la Corte Suprema de Justicia vinculados con el rol de la independencia de los magistrados en lo Político y Jurídico en un Estado Social y Democrático de Derecho? De la respuesta se puede apreciar que el 73% de los encuestados manifestaron que si tienen conocimiento de la existencia de Precedentes emitidos por la Corte Suprema de Justicia vinculados con el rol de la independencia de los Jueces en un Estado Social y Democrático de Derecho.

CUADRO N° 9

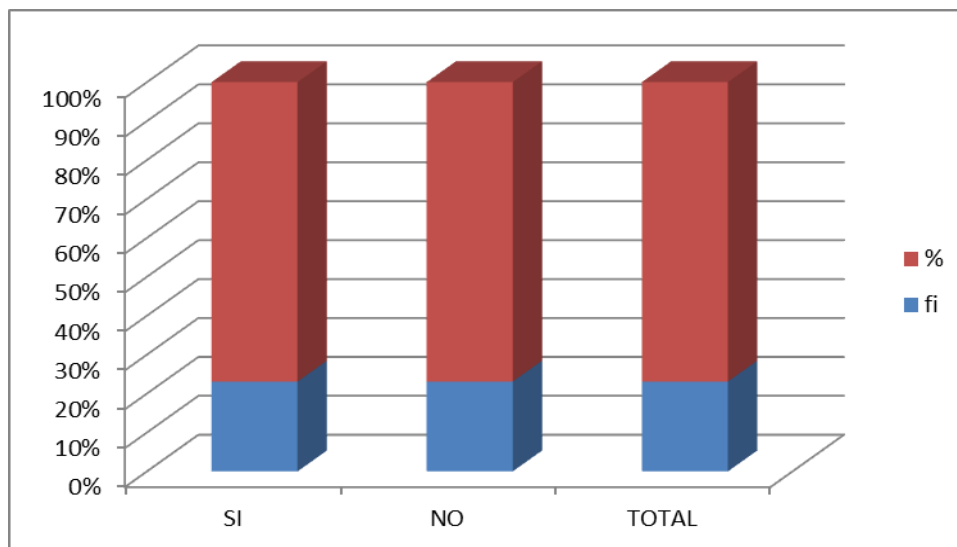
¿Considera Ud. Que existe obstáculos en la independencia personal de los Magistrados?

| ITEMS | fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 6 | 80 |
| NO | 24 | 20 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO N° 9

Que existen obstáculos en la independencia personal de los Magistrados



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO N° 9

A la pregunta: ¿Considera Ud. Que existe obstáculos en la independencia personal de los jueces? De la respuesta se puede apreciar que el 80% de los encuestados manifestaron que si existe obstáculos en la

independencia personal de los jueces porque existe injerencia en las decisiones judiciales al emitir sus sentencias.

CUADRO N° 10

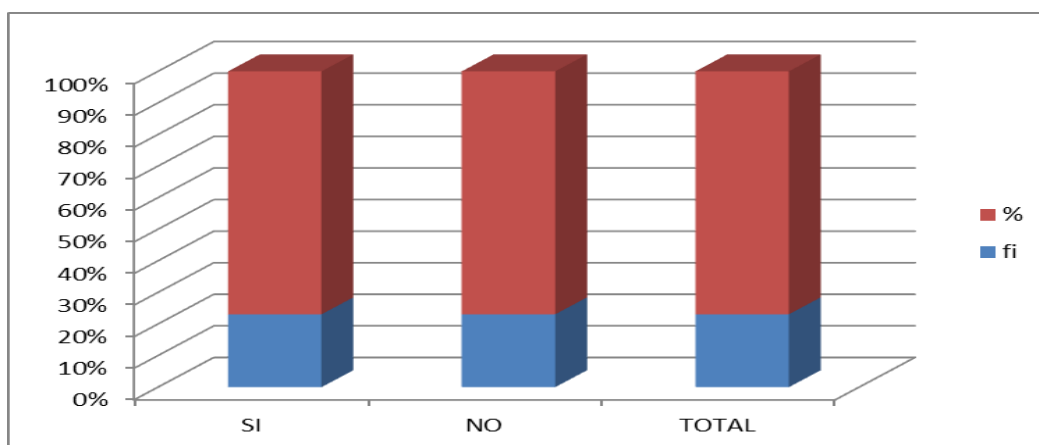
¿Para Ud. Acorde a su experiencia y conocimientos debe existir mecanismos de control popular más idóneos para evaluar a los jueces sobre su desempeño y función dentro del Poder Judicial?

| ITEMS | fi | % |
|-------|----|-----|
| SI | 27 | 90 |
| NO | 3 | 10 |
| TOTAL | 30 | 100 |

Fuente: Cuestionario aplicado a los abogados
Elaboración: Cesar González Aguirre

GRÁFICO N° 10

Acorde a su experiencia y conocimientos deben existir mecanismos de control popular más idóneos para evaluar a los Magistrados sobre su desempeño y función dentro del Poder Judicial.



Fuente: Excel de Microsoft-versión 2013

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CUADRO Y GRÁFICO N° 10

A la pregunta: ¿Para Ud. Acorde a su experiencia y conocimientos debe existir mecanismos de control popular más idóneos para evaluar a los Magistrados sobre su desempeño y función dentro del Poder Judicial? .De la respuesta se puede advertir que el 90% de los encuestados opinaron que existe experiencia y conocimientos sobre mecanismos de control popular más idóneos para evaluar a los Magistrados sobre su desempeño y función dentro del Poder Judicial.

4.3. ESTUDIO DE CASOS

El objeto de estudio del presente trabajo estuvo constituido por la legislación constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial peruano. La normatividad peruana relacionada a la autonomía e independencia del poder judicial se presenta a continuación: - Artículo 1 de La Constitución Política del Perú referente a la defensa de la persona humana. - Artículo 43 de La Constitución Política del Perú referente a que es un Estado democrático. - Artículo 138 de La Constitución Política del Perú referente a la potestad de administrar justicia. - Artículo 139 de La Constitución Política del Perú referente a los principios y derechos de la función jurisdiccional: Inciso 1 referente a la exclusividad de la función jurisdiccional. Inciso 2 referente a la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Inciso 18 referente a la colaboración del poder ejecutivo - Artículo 145 de La Constitución Política del Perú referente a la atribución de presentar su proyecto presupuestal. - Artículo 146 de La Constitución Política del Perú referente a que el Estado le garantiza su independencia, inamovilidad y permanencia en el cargo y una remuneración digna. - Artículo 1 de La Ley Orgánica del

Poder Judicial referente a la potestad de la función jurisdiccional. - Artículo 2 de La Ley Orgánica del Poder Judicial referente a que es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional. - Artículo 16 de La Ley Orgánica del Poder Judicial referente a la independencia en su actuación jurisdiccional), establece esos mismos principios y derechos de los magistrados.

Instrumentos

Se utilizó como instrumento un cuestionario de 10 preguntas, para obtener información de los magistrados del Distrito Judicial de Huánuco, acerca de la independencia personal, el ejercicio independiente e imparcial de la función jurisdiccional del juez, el cumplimiento del servicio de tutela judicial, en un Estado Social y Democrático de Derecho, la responsabilidad jurídica de los magistrados en la aplicación de la ley, la presión política que ejercen los grupos de poder en la función de los jueces, la responsabilidad política del juez y el rol que desempeñan los jueces en un Estado Social y Democrático de Derecho.

En la recolección de datos con el instrumento aplicado a los Abogados litigantes en las diversas materias se enfocó en conocer las diferentes posturas de los magistrados del distrito judicial de Huánuco, tomando en cuenta su especialidad e instancia. La técnica de la encuesta se aplicó en la Corte Superior de Justicia de Huánuco. Las preguntas fueron construidas con respuestas cerradas y fue procesada en un programa de Excel que facilitó su ulterior presentación en las tablas que conforman nuestros resultados. Las respuestas se agruparon en bloques tanto afirmativas como

negativas y en base a ello, se extrajo las conclusiones pertinentes. Previo a la obtención de las conclusiones, las respuestas fueron contrastadas con la legislación relevante y con las observaciones del autor sobre el comportamiento independiente de los magistrados. Se examinó la naturaleza jurídica del Poder Judicial en un Estado Social y Democrático de Derecho aplicando el método dogmático. Así mismo, se analizó brevemente los sistemas jurídicos de Colombia, México y Venezuela relacionados a la independencia personal del juez mediante el método dogmático el cual facilitó la comprensión y ulterior explicación de las instituciones jurídicas (Estado Social y Democrático de Derecho, Poder judicial, los principios de autonomía e independencia).

Finalmente, el método hermenéutico jurídico permitió el análisis tanto de la normatividad constitucional peruana sobre autonomía e independencia del Magistrado que constituyó nuestro objeto de estudio.

Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, con respecto a la autonomía e independencia personal del Magistrado dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho, se presentan en la Tabla y gráficos estadísticos.

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. contrastación de los resultados

Uno de los más graves problemas que viene aquejando al Poder Judicial es la provisionalidad de sus magistrados. Se sabe que el 20% de jueces en el Perú son supernumerarios, es decir, no tienen la condición de titulares nombrados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura ahora la reciente Junta Nacional de Justicia. Estas cifras revelan que un importante número de Jueces que administran justicia en el Perú no han sido nombrados para ese puesto mediante un proceso de oposición o méritos, sino que para cubrir las plazas vacantes se recurre a la promoción de magistrados de un nivel inferior en condición de jueces provisionales o a la designación de jueces supernumerarios (antiguamente llamados jueces suplentes) considerados en una lista de espera previamente elaborados mediante concursos de selección no rigurosos, salvo aquellos que tienen esta condición por no haber alcanzado plaza vacante en un proceso de selección de nombramiento. Este estado de cosas, trae consigo grave riesgo para la investidura independiente de los jueces y su correlativa actuación imparcial en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Así, muchas veces se ha presentado que cuando los Jueces no cuentan con la garantía de la permanencia e inamovilidad del cargo pueden ser más vulnerables ante diversas presiones, que afectan su independencia tanto en el interior del mismo Poder Judicial como externas (mediáticas o de otros poderes

privados o del Estado). Se agudiza este problema, cuando la ausencia de titularidad, causa riegos advertidos como que los jueces provisionales y supernumerarios terminen sometiéndose a los criterios impuestos por los titulares, máxime si sus correspondientes designaciones o permanencias dependan exclusivamente de la voluntad muchas veces interesadas y direccionadas de ciertos presidentes de cortes superiores como se han visto con estupor en estos últimos tiempos a propósito de los casos de mega corrupción y redes de organización criminal que se vienen investigando.

Esta problemática, se hace mayor cuando ya no solo los provisionales o supernumerarios, sino la generalidad de jueces ven afectado su independencia cuando se encuentran en la imperiosa necesidad de tener que aplicar los criterios interpretativos sentados por los altos tribunales de justicia al resolver los casos concretos que se les ponen a su conocimiento, el cual consideramos que parte de un equivocado entendimiento del principio de independencia que se le reconoce tanto a nivel constitucional como legislativo, toda vez que la independencia no significa autarquía y no debe ser vista en el plano cerrado de la persona del juez, sino tiene una significancia vista desde la perspectiva de legitimidad, esto es, que la independencia más que prurito de poder constituye un derecho innegable de la ciudadanía que espera de sus jueces respuestas y soluciones uniformes respecto de casos concretos similares o idénticos, es decir, soluciones totalmente previsibles que le otorgan seguridad jurídica a todo el sistema justicia sobre la base del trato igualitario aplicados a partir de los criterios establecidos como precedentes por el Tribunal Constitucional o las Salas

Plenas casatorias, sin perjuicio de poder resolver el caso concreto con mejorado criterio en la misma línea del precedente de cara a brindar justicia al ciudadano que lo pide, irradiando a las sociedad en búsqueda de conseguir confianza de la sociedad.

5.2. SUSTENTACIÓN CONSISTENTE Y COHERENTE DE SU PROPUESTA

Desde mi experiencia en mi calidad de Juez Superior de Justicia reconozco la importancia de que el magistrado mantenga en todo momento su independencia y objetividad, se capacite y no se deje presionar por los medios de comunicación o la coyuntura mediática u otro tipo de poder privado o público sean externos o internos al Poder Judicial. El juez se ubica como árbitro en el medio de dos pretensiones durante el desarrollo de un proceso, buscando en todo momento alcanzar convicción para resolver el caso concreto dando la razón a la parte que le asiste el derecho según el ordenamiento jurídico. El juez se constituye en el pilar de todo Estado Democrático al ser salvaguardia o garante de los derechos fundamentales de las personas reconocidas expresa o implícitamente por la Constitución Política del Estado, de ahí que es su deber sagrado de dar solución a los conflictos de intereses producidos en la sociedad, orientando su accionar a reestablecer la armonía social interrumpida cuando un ciudadano no cumple espontáneamente con respetar la titularidad o propiedad de derechos reconocidos a las personas. Así, se ha reconocido en el pacto social manifestado en nuestra Carta Magna, que el Poder Judicial administra (preferimos decir impartir) justicia en nombre del pueblo a través de sus órganos jurisdiccionales, es decir, por sus Jueces, quienes solo se

encuentran sometidos a la Constitución y las leyes. Y es precisamente, que este marco normativo declara que los jueces en el cumplimiento de sus funciones administran justicia con independencia y velando por la debida interpretación y aplicación de la ley, dando lugar incluso que los altos tribunales de justicia corrijan en aras de la función nomofiláctica del Derecho. Esta función, tal como arrojó este proceso investigativo, no cabe duda que se logra con la interpretación y aplicación normativa uniforme por parte de los jueces en todas las instancias y en todo lugar, siguiendo los criterios jurisdiccionales establecidos como precedentes vinculantes por los órganos jurisdiccionales supremos; actuación que tampoco cabe duda beneficia a la imagen del Poder Judicial como Poder del Estado. Siendo necesario precisar que de esta manera se encuentra garantizada la independencia personal de los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ya que la ciudadanía percibirá que el Poder Judicial tiene respuestas predecibles y uniformes, desalentando la conducta litigiosa al saber anteladamente la solución a sus problemas y que de seguro también estas respuestas serán más oportunas, ya que al desincentivar la litigiosidad se reflejarán en una menor carga procesal que permitirá a los jueces organizar y manejar mejor sus despachos asignando adecuadamente los recursos humanos y logísticos con eficiencia y eficacia que caracteriza a un despacho judicial moderno.

5.3. PROPUESTA DE NUEVA HIPÓTESIS

En primer lugar, resulta indispensable una reforma de la organización judicial, que por supuesto no debe entenderse lograda en una expresión legislativa. Se trata de replantear la función social de la magistratura,

básicamente de contar con una que garantice una administración de justicia predecible, oportuna y brinde seguridad jurídica; una que esté alerta para atender las demandas sociales en caso se presentará rupturas del bienestar social, sobre todo por la ocurrencia de un desencuentro entre la realidad y la ley, provocada por la aplicación indebida hasta antojadiza de ésta última y así conjurar el espacio para la percepción social de injusticia y evitando el acrecentamiento del descontento popular con el trabajo y servicio que presta el Poder Judicial por mandato Constitucional: Artículo 138 “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a la leyes. Actualmente, en las sociedades ya modernas, la función de los jueces se consideran que constituye una mezcla de magisterio y apostolado, en consecuencia, el Juez debe estar consciente que todos los días debe brindar un servicio de justicia eficiente y eficaz mediante la solución de conflictos con arreglo a la Constitución y a las leyes, máxime si su rol protagónico dentro de la sociedad como máximo intérprete de la ley consiste en privilegiar la supremacía de los derechos fundamentales mediante su actividad creativa del Derecho con la finalidad de alcanzar la paz social en justicia. Entonces, los cambios que se requieren para una cultura judicial de respeto a los precedentes en su verdadero significado y alcance, debe iniciarse por la imposición de un nuevo paradigma que involucre desde el modo o forma de selección de jueces mediante procesos de selección que faciliten la incorporación de Magistrados idóneos tanto en su esfera de integridad como su capacitación, que tengan como norte la confianza de la ciudadanía a su labor jurisdiccional, ya que de nada servirá contar con

jueces capacitados pero no íntegros o íntegros pero que no se encuentren capacitados para asumir tan noble labor como es el de impartir justicia en nombre del pueblo.

En esta labor, ya es tiempo que se acepte que la Constitución es una norma jurídica prevalente en nuestro sistema jurídico y que en todo trabajo como en el Poder Judicial siempre se busque el respeto a la persona y su dignidad como fin supremo del Estado y de la sociedad y, que en éste propósito es respetar la dignidad de las personas brindando un buen servicio rápido y eficaz en la solución de intereses contrapuestos que existen en la sociedad; siendo obvio que quienes presentan problema sociales desean soluciones prontas, debidas y justas mediante el imperio de la ley recogidas en las resoluciones y/o sentencias judiciales, las mismas que debe ser aceptadas y acatadas por su corrección y razones objetivas claramente justificadas tanto directamente para la persona interesada como indirectamente para la sociedad en su conjunto y, es a ello que se denomina legitimidad a la función jurisdiccional que prestan los jueces.

Hoy en día, se hace necesariamente imperiosa la existencia de un trabajo de organización y sistematización de los precedentes jurisdiccionales a ser seguido por todo el universo de Jueces que engloba el sistema de justicia; es por ello que el encargado de este accionar debe estar liderado por los Jueces Supremos conjuntamente con el Centro de Investigaciones Judiciales, de manera que se garantice que los precedentes jurisdiccionales sean conocidas por todos los operadores del sistema justicia desde las

universidades en la formación de profesionales abogados con altas cuotas de deontología forense y no dar oportunidad a débiles justificaciones de desconocimiento para su aplicación en casos concretos similares; fomentando asimismo, la concientización de que no se vulnera la independencia de los Jueces, sino que vista desde el plano social más por el contrario se levante y avista la independencia de los jueces, quienes al aplicar los criterios jurisprudenciales establecidos mediante los precedentes previsibles otorgarán predictibilidad a sus decisiones y con ello no cabe duda que la sociedad dará su voto de confianza a su labor jurisdiccional y a su independencia personal porque de existir un precedente sabrá conscientemente cual será la solución del conflicto de interés que conoce el juez.

5.4. APORTES CIENTÍFICOS

La independencia del juez está referida al tiempo anterior y al contemporáneo a la decisión judicial. Cuando el juez forma su juicio y su voluntad sobre el caso sometido debe estar libre de toda coacción y presión externa, salvo el mandato de la Constitución y la ley, de tal manera que la decisión sea fruto del sereno estudio de los aspectos jurídicos de aquel caso, con dominio de sus posibilidades, sin ninguna perturbación o temor.

La independencia del juez de la mano con la seguridad jurídica deben ser entendidas como la posibilidad de prever de antemano las soluciones que los Jueces van a dar a los casos judiciales en conflicto. Ello será factible de alcanzar con jueces independientes al momento de aplicar el Derecho y

reconocer el derecho sin más arbitrio que su consciencia ajeno a todo aquello que perturba su decisión y que más que al aplicar los precedentes está reconociendo la actividad creadora del Derecho, tanto más, si es pacífico considerar que el ordenamiento jurídico positiva o legalmente vista esta distante a ser completa o que contenga soluciones o normas de preferencia para todos los casos, sino requiere de la actividad de los jueces completando los vacíos o lagunas normativas conforme a los precedentes que cumplen una función informadora e integradora del ordenamiento jurídico, sin soslayar que en cada caso concreto similar los jueces pueden mejorar la solución dándole mayores fundamentos que trasciendan al logro de la paz social.

El tema tiene mucha relevancia teórica, por cuanto, no existe en la literatura jurídica un estudio sobre los alcances y funciones y responsabilidad de la Independencia personal del juez, no obstante, la importancia y valía que su estudio y análisis significa.

CONCLUSIONES

1. La independencia judicial es soporte básico de todo Estado que se caracterice de democrático, ya que el juez se constituye en baluarte de la defensa de los derechos fundamentales de las personas y su dignidad.
2. Se ha establecido que la independencia personal del juez influye como acto funcional en mejorar la seguridad jurídica en la administración de la justicia peruana. La independencia que verdaderamente interesa o debería interesar en relación con el accionar de los jueces, es, como se apuntó al inicio, la que debe reconocérsele frente al caso concreto. Nuestro Tribunal Constitucional lo ha señalado así en varios de sus pronunciamientos.
3. Se ha determinado que la presión mediática y otros poderes privados y públicos influyen en la independencia del juez. Porque las manifestaciones de esa independencia sólo tienen legitimidad en tanto coadyuven a lograr o consolidar la del caso concreto.
4. La independencia del juez se encuentra proclamada en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, este principio y derecho de la función jurisdiccional justicia no es claramente recepcionado por los operadores del sistema de justicia que muchas veces ponen en cuestión con la percepción ciudadana.
5. Un menor porcentaje de jueces consideran que la vinculación de los criterios jurisdiccionales establecidos mediante los precedentes atentan su independencia personal, alegando que los convierte en boca de los precedentes y que solo se encuentran sujetos a la Constitución y las leyes.

6. Los precedentes jurisdiccionales al promover la uniformidad de las decisiones judiciales, coadyuvan a una justicia predecible y brindan seguridad jurídica.
7. El seguimiento y aplicación de los precedentes jurisdiccionales no influyen negativamente en la independencia personal de los jueces, más por el contrario al predecir la justicia en el caso concreto crea legitimidad al trabajo judicial.
8. La competencia dada por ley al juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento. La normatividad constitucional y la Ley Orgánica protegen su independencia, así como otorgan autonomía al Poder Judicial, aunque en la realidad se percibe que este poder no goza de plena autonomía política, administrativa, económica y disciplinaria en cierto número de casos.
9. Un sistema de impartición de justicia basado en la observancia de precedentes jurisdiccionales debe ser liderado por los Jueces Supremos con apoyo del Centro de Investigaciones del Poder Judicial para su difusión constante.

RECOMENDACIONES

1. Se debe otorgar mayor importancia en garantizar la independencia de los Jueces, porque constituye un derecho no dirigido únicamente al juez como impartidor de justicia, sino que constituye derecho fundamental de los ciudadanos en su vida de interrelación social en bienestar.
2. Se debe aprobar un reglamento que protocolice la organización y sistematización de precedentes jurisdiccionales, garantizando su difusión oportuna.
3. En un régimen democrático el principio de independencia de los jueces se constituye en una garantía fundamental para los ciudadanos y, a su vez, una condición esencial para el ejercicio de la función judicial. Lo que se pretende es que el Magistrado esté libre de presiones indebidas, internas y externas al Poder Judicial, a la hora de tomar una decisión.
4. Se debe mantener el principio de independencia del juzgador, quién no está sujeto a elementos externos ni internos que puedan influenciar no solo su decisión, sino también el desarrollo del proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACKERMAN, R. 2001. Corrupción en el Poder Judicial Peruano: marco conceptual. Lineamientos de una propuesta de participación ciudadana para un control y erradicación. Bioética, Lima.
- AGUILO REGLA, J., (2004), *Teoría general de las fuentes del Derecho, La Constitución del Estado Constitucional*, Bogotá, Colombia: Editorial Palestra.
- AGUILÓ, J. 2004. La Constitución del Estado Constitucional. Palestra, Lima.
- ARANGO, L. 2011. La constitución política de 1991. Themis, Bogotá
- AGUILO REGLA, J., (2008), *La Constitución del Estado Constitucional*, Barcelona, España: Editorial Ariel.
- AGUILO REGLA, J., *Imparcialidad y concepciones del derecho*, en jurid. Manizales.
- ARIANO DEHO E., (2006), *Precedente Vinculantes y Pirámide Normativa*, Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- BASTERRA, M.I. 2002. Los Derechos Fundamentales y el Estado. Multiculturalismo, minorías y grupos étnicos. Ediar, Buenos Aires.
- BERNALES BALLESTEROS E., (1996), *La Constitución de 1993 – Análisis comparado*”, Lima, Perú: Honrad Adenauer Stiftung – CIEDLA.
- BORDEAU, G. 1981. Derecho Constitucional e Instituciones Políticas. Editorial Nacional, Cultura y Sociedad, Madrid.

- CÁCERES NIETO, (2000) “Lenguaje y Derecho. Las normas jurídicas como sistema de enunciados”, 1ª edición, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- CARPIO MARCOS Edgar y GRANDEZ CASTRO Pedro P, (2007) “Estudios al Precedente Constitucional”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- CARRANCO, J. 2000. Poder Judicial. Editorial Porrúa, México.
- CERIAJUS. 2004. Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia. Lima.
- CASTILLO CORDOVA Luis, “¿Activismo extralimitado el Tribunal Constitucional?”, en Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional, Nº 4, Palestra Editores, Lima, pp.155 y ss.
- CASTILLO CORDOVA Luis, (2008) “El Tribunal Constitucional y su Dinámica Jurisprudencial”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- CASTILLO ALVA José Luis y CASTILLO CORDOVA Luis, (2008) “El precedente Judicial y Precedente Constitucional”, 1ª edición, Ara Editores, Lima.
- COHAILA, E. 2013. Micro corrupción en el Poder Judicial: El caso de los depositarios judiciales (http://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/04/INFORME-DJ_final.pdf; consultado el 15-04-2014).
- EL PERUANO. 1993. Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 3 de junio de 1993.

- FALCON Y TELLA, María José (2010), “La jurisprudencia en los Derechos romano, anglosajón y continental”, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires.
- FERRERES Víctor y XIOL Juan Antonio, “El carácter vinculante de la jurisprudencia”, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009.
- FIX ZAMUDIO Héctor y FERRER MAC-GREGOR Eduardo, (2009) “Las Sentencias de los Tribunales Constitucionales”, Editorial ADRUS SRL, Arequipa.
- GACETA OFICIAL .1998. Ley orgánica del poder judicial de la república bolivariana de Venezuela. Ediciones jurídicas, Caracas.
- GALAGANO, Francesco, (2000) “Atlas de Derecho Privado Comparado”, traducido por Juan Antonio Fernández Campos y Rafael Verdera Server, Fundación Cultural del Notariado, Madrid.
- GARCIA AMADO Juan Antonio, (2008) “Controles Descontrolados y Precedentes sin Precedente”. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú en el Exp. N° 3741-2004-AA/TC (Caso Salazar Yarlenque), en Jus-Constitucional, N° 1, Lima.
- GASCON ABELLAN, Marina, “La técnica del precedente y la argumentación racional”.
- GONZALES MANTILLA, Gorki, (2009) “Los Jueces”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.

- GRANDEZ CASTRO, Pedro; (2007) “Las peculiaridades del precedente constitucional en el Perú”, en Estudios al precedente constitucional, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- GRANDEZ CASTRO Pedro, “Los precedentes del Tribunal Constitucional. Notas sobre su funcionamiento en nuestro sistema jurídico”, en Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional, N° 6, Palestra Editores, Lima, pp.5 y ss.
- GONZALES, H. 1991. Teoría Política. Editorial Porrúa, México.
- HABERLE Peter, (2003) “El Estado Constitucional”, 1ª edición, Fondo Editorial PUCP del Perú, Perú.
- IGARTUA SALVATIERRA Juan, (2008) “La Fuerza Vinculante del Precedente Judicial”, en JUS –CONSTITUCIONAL, N° 1, Lima.
- LANDA ARROYO, César, (2006) “Constitución y Fuentes del Derecho”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- LOPEZ MEDINA Diego Eduardo, (2006) “El Derecho de los Jueces”, 2ª edición, LEGIS, Colombia.
- LUPHAKT, A. 1991. Las Democracias Contemporáneas. Editorial Ariel, Barcelona. MACAULAY, F. 2005. Democratización y poder judicial: agenda de reforma en competencia. América Latina Hoy. Salamanca.

- MARINONI, Luiz Guilherme, Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil, disponible en:

<http://www.professormarinoni.com.br/manage/pub/anexos/2009>

0909021912Common_law.doc

- MARTÍNEZ ALARCÓN, María Luz, (2004) “La independencia judicial”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- MORAL SORIANO Leonor, (2002) “El Precedente Judicial”, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid.
- MONROY GALVEZ Juan, “Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional”, en Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional, Nº 4, Palestra Editores, Lima, pp.13 y ss.
- MONTERO AROCA JUAN, (2004) “Derecho jurisdiccional”, tomo I – Parte General, 13ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- MONTROYA, I. 1997. El Poder Judicial y Estado Democrático de Derecho en el Perú. Editorial Instituto de Defensa Legal, Lima.
- OLLERO Andrés, (2005) “Igualdad en la aplicación de la ley y precedente judicial”, 2ª edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- PASCO, M. 2001. Cincuenta artículos perecibles. Editorial DEPIA Abogados, Lima.

- PRIETO SANCHÍS, Luis, (1997) “Constitucionalismo y Positivismo”, 1ª edición, 2ª reimpresión, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, México.
- PRIETO SANCHÍS, Luis, (2002) “Derechos fundamentales neoconstitucionalismo y ponderación judicial”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- PRIETO SANCHÍS Luis, (2007) “Interpretación jurídica y creación judicial del derecho”, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.
- RENTERIA, Adrián, (2002) “Discrecionalidad Judicial y Responsabilidad”, 2ª edición, Doctrina Jurídica Contemporánea, Fontamara.
- RENGEL-ROMBERG, A. 2006. “La Profesionalización de los Jueces”, Autolitho, Caracas.
- RIOJA BERMUDEZ A. 2013. Constitución política del Perú. Jurista Editores. Lima. SAN MARTIN, C. 2011. (http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc03012011-114435.pdf; consultado 15 de abril del 2014).
- RODRIGUEZ César, (2008) “La Decisión Judicial El Debate Hart - Dworkin”, 6ª reimpresión, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2008.
- RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger (2007) “El precedente constitucional en el Perú: entre el poder de la historia y la razón de los derechos”, en Estudios al precedente constitucional, 1ª edición, Palestra Editores, Lima.

- RUBIO CORREA Marcial, (2009) “El Sistema Jurídico Introducción al Derecho”, 10ª edición, Fondo Editorial PUCP del Perú, Lima, 2009.
- SANTISTEVAN DE NORIEGA Jorge, “Supremacía de la constitución y de las interpretaciones del Tribunal Constitucional”, en Cuadernos de análisis y crítica a la jurisprudencia constitucional, Nº 4, Palestra Editores, Lima, pp. 75 y ss.
- TARUFFO Michele, (2008) “Dimensiones del Precedente Judicial”, en JUS – CONSTITUCIONAL, Nº 1, Lima.
- TARUFFO Michele, (2009) “Páginas sobre justicia civil”, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid.
- TOCQUEVILLE, Alexis de (1996). “La Democracia en América”. Fondo de Cultura Económica. México.
- TUPAYACHO SOTOMAYOR, Jhonny, (2009) “El Precedente Constitucional Vinculante en el Perú”, 1ª edición, Editorial ADRUS SRL, Arequipa.
- XIOL RIOS Juan Antonio, (2005) “El Precedente Judicial y otros Estudios sobre el Proceso Administrativo”, Fundación Beneficentia Et Peritia Iuris, Madrid.
- ZÚÑIGA URBINA, Francisco, “Sentencias del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El valor del precedente”, en Estudios Constitucionales, Julio, Año/Vol. 4, núm. 001, Centro de Estudios Constitucionales, Santiago, Chile.
- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 2014. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial Isbn, México.

ANEXOS

CUESTIONARIO

TITULO: “LA INDEPENDENCIA PERSONAL DEL JUEZ EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANO.

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X dentro del paréntesis ()

1.- ¿Considera Ud. que los jueces ejercen con plena independencia personal sus funciones jurisdiccionales?

() Si

() No

2.- ¿Considera Ud. que el Estado garantiza la independencia del Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional?

() Si

() No

3.- ¿Considera Ud. que existe un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho?

() Si

() No

4.- ¿Considera Ud. Que el apartamiento de los precedentes, constituyen responsabilidad funcional de los jueces?

() Si

() No

5.- ¿Considera Ud. que en ciertos casos el magistrado al expedir sentencia, se aparta de sus criterios y principios debido a la presión política de los grupos de poder?

() Si

() No

6.- ¿Considera Ud. que los jueces tienen responsabilidad política a consecuencia del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

() Si

() No

7.- ¿Cree Ud. Que se debe buscar fortalecer la independencia personal de los magistrados el rol que debe desempeñar dentro de un Estado social y democrático de Derecho?

() Si

() No

8.- ¿Tiene conocimiento de la existencia de Precedentes emitidos por la Corte Suprema de Justicia vinculados con el rol de la independencia de los magistrados en un Estado Social y Democrático de Derecho?

() Si

() No

9.- ¿Considera Ud. que existe obstáculos en la independencia personal de los Magistrados?

() Si

() No


10.- ¿Para Ud. Acorde a su experiencia y conocimientos debe existir mecanismos de control popular más idóneos para evaluar a los Magistrados sobre su desempeño y función dentro del Poder Judicial?

() Si

() No

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: “LA INDEPENDENCIA PERSONAL DEL JUEZ EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PERUANO.” - Elaboración: Cesar O. González Aguirre

| PROBLEMA | OBJETIVOS | HIPÓTESIS | VARIABLES | METODOLOGÍA | INSTRUMENTOS |
|--|---|---|---|---|---|
| <p>PROBLEMA PRINCIPAL</p> <p>PG. ¿En qué medida los precedentes vinculantes influyen en la independencia personal del juez y en la mejora de la seguridad jurídica en la impartición de la justicia peruana?</p> | <p>OBJETIVOS GENERALES.</p> <p>OG.1: Establecer en qué medida los precedentes vinculantes influyen en la independencia personal del juez y en la mejora de la seguridad jurídica en la impartición de la justicia peruana.</p> | <p>HIPÓTESIS GENERAL</p> <p>Si la independencia personal del juez influye favorablemente como acto funcional entonces mejorara la seguridad jurídica en la administración de justicia del Perú, con el cumplimiento obligatorio de los precedentes vinculantes.</p> | <p>VARIABLES INDEPENDIENTES</p> <p>Independencia personal del juez</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> •Honestidad. •Alta responsabilidad funcional y social, •Especialización y Expertos. •Idoneidad. •Indemnización solidaria en partes iguales | <p>MÉTODO: Observación Crítico Histórico Dialectico. Hermenéutica</p> <p>EL TIPO DE INVESTIGACIÓN Es Aplicada</p> <p>NIVEL DE INVESTIGACIÓN Es descriptivo y explicativo</p> <p>DISEÑO: Es no experimental V. ESQUEMA</p>  <p>M = muestra x,y,= variables r = relación entre las variables</p> <p>POBLACIÓN Y MUESTRA</p> <p>Población Estará conformada por todos los Magistrados del Poder Judicial a nivel nacional.</p> <p>Muestra Estará determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO de manera empírica o azar por el total de los Magistrados del Distrito Judicial de Huánuco.</p> | <p>Técnicas</p> <p>Encuesta</p> <p>Entrevista</p> <p>Observación</p> |
| <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>PE.1: ¿De qué manera la imposición obligatoria de los precedentes vinculantes influye en la independencia del juez?</p> <p>PE.2: ¿En qué medida la independencia del juez se encuentra proclamada en la constitución y otras leyes?</p> <p>PE3: ¿En qué medida la competencia dada por ley al juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento?</p> | <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.</p> <p>OE.1: Determinar de qué manera la imposición obligatoria de los precedentes vinculantes influye en la independencia personal del juez.</p> <p>O.E.2: Establecer en qué medida la independencia del Juez se encuentra proclamada en la constitución y otras leyes.</p> <p>OE.3: Conocer en qué medida la competencia dada por ley al juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento.</p> | <p>HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.</p> <p>HE.1: La imposición de los precedentes no influye negativamente en la independencia del juez, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.</p> <p>HE.2: Si se respeta la independencia del Juez proclamada en la Constitución y otras leyes entonces la Administración de justicia sería eficaz en la resolución de conflicto de intereses y se garantizaría la seguridad jurídica.</p> <p>HE.3: Si se hace uso adecuado de la competencia dada por ley al juzgador sobre su autoridad en la decisión entonces los asuntos puestos de su conocimiento no afectarían el principio de legalidad y el debido proceso.</p> | <p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>Sistema de justicia peruano</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> •Regulación y modificación de normas •Modificación de la legislación. . •Doctrina de la responsabilidad funcional •Para promover la paz social en justicia. •El fomento a la inversión privada. •La estabilidad democrática. •Fomento al desarrollo | | <p>Instrumento</p> <p>Cuestionario</p> |